

153

FEDOR  
GANZ

Ensayo marxista  
de la Historia  
de España

**grijalbo**

**colección**

**70**

FEDOR GANZ

ENSAYO MARXISTA  
DE LA HISTORIA  
DE ESPAÑA

EDICIONES GRIJALBO, S.A.  
BARCELONA – BUENOS AIRES – MÉXICO, D.F.

© 1934, FEDOR GANZ  
© 1977, EDICIONES GRIJALBO, S.A.

Primera edición  
Reservador todos los derechos.

Printed in Spain  
Impreso en España

ISBN:84-253-0846-1  
Depósito Legal: B. 22.105-1977

Impreso en ATENAS, A.G. – Escorial,135 – Barcelona, 12

# ÍNDICE

## INTRODUCCIÓN

El pasado revolucionario de la burguesía europea 5

## I. LA BURGUESÍA ESPAÑOLA

1. Dios, Patria, Rey 9

2. Por la senda constitucional 18

## II EL PROLETARIADO ESPAÑOL

3. República sin trabajadores 31

## EPÍLOGO

4. Revolución y contrarrevolución 40

5. Las postrimerías del capitalismo 53

# INTRODUCCIÓN

## *EL PASADO REVOLUCIONARIO DE LA BURGUESÍA EUROPEA*

La violencia es la partera de toda vieja sociedad que lleva otra nueva en sus entrañas.

También ella es una potencia económica.

(Carlos Marx, El capital, I)

Revolución. Mucho se viene hablando de ella en estos días, cuando los antagonismos de clase se presentan cada vez más agudos.

«*Hicimos la revolución política* —exclaman algunos—; *vamos ahora a la revolución social*».

«¿Cuál es la diferencia?» pregunta el oyente ingenuo. Aclaremos sus dudas.

Una clase oprimida se lanza a la revolución para sacudir el yugo que le impone la clase dominante, destruyendo su poder estatal. Para merecer su nombre, la revolución tiene que surgir de las entrañas de un pueblo; será forzosamente «social». La revolución «política» a que aluden ciertos «teorizantes» no es más que una simple conjura de palacio para sustituir un monarca por otro, una camarilla por otra y, a lo mejor, un cacique por otro cacique. Apenas alcanza a mover las cumbres, nunca llega a la profundidad.

Hay quienes tienen interés en hacernos creer que el Estado es una institución de esencia divina, una especie de Espíritu Santo que flota muy por encima de la lucha de clases, interviniendo en ella como árbitro imparcial y justo. Pero ya no llegan a engañarnos los defensores de este mito moribundo. Su Estado sacrosanto no es sino un instrumento de las clases dominantes. De él se sirven para defender sus intereses y mantener su dominación.

El Estado aparece simultáneamente con la división en clases. En las comunidades primitivas aún no se había producido esta división, no existía poder estatal. En la futura sociedad sin clases, el Estado habrá desaparecido.

Revolución es destrucción violenta del Estado, de sus órganos (ejército, Policía, justicia, etc.) y de su base: el régimen vigente de la propiedad. En el seno de la vieja sociedad, la clase oprimida se organiza y forma sus órganos de poder. El club de los Jacobinos, el soviét hacen saltar el viejo molde que los encierra. Revolución es guerra a muerte entre

dos organizaciones: el Estado de la clase dominante y el embrión estatal de la clase dominada que pugna por su liberación. Al salir de la Edad Media, la burguesía naciente de las ciudades aspira a realizar su revolución. El aumento de su fuerza económica, sus ansias de poder incrementar libremente la producción para conseguir mayores beneficios la hacen cada día más incompatible con la persistencia de la dominación feudal, que por medio de los gremios reglamenta y restringe la producción y competencia e impide la libre circulación de las mercancías. La Iglesia católica es el principal sostén del feudalismo y el más poderoso de los señores feudales. A sus enormes riquezas, a su influencia política añade el dominio absoluto sobre las conciencias, que le permite rodear los privilegios feudales con el nimbo de la gracia divina encubriendo atropellos y usurpaciones.

La lucha contra el feudalismo será en primer lugar la lucha contra la Iglesia. Las primeras revoluciones que intenta el Estado llano tienen todas un carácter religioso. En Alemania, la Reforma luterana culmina en la sublevación campesina dirigida por Tomás Münzer. En muchos puntos, su programa aparece como una anticipación del socialismo, pero todas las reivindicaciones son formuladas de acuerdo con los principios del Evangelio y adornadas con numerosas citas de textos sagrados.

En 1648, un siglo después de fracasar las sublevaciones alemanas, la burguesía inglesa, irritada por los abusos de la monarquía y de las camarillas feudales, tomó las armas bajo la bandera del calvinismo. En unión de los campesinos libres triunfó sobre las fuerzas de la reacción; el rey Carlos I fue ejecutado. Los puritanos ingleses democratizaron la Iglesia. Reconocer el derecho al libre examen no fue posible sin conceder al mismo tiempo amplias libertades a los ciudadanos. Muerto el caudillo Cromwell, se produjo la inevitable reacción, pero el feudalismo quedó vencido. La burguesía había logrado todas las conquistas que le era posible alcanzar en aquel momento, si se tiene en cuenta el escaso desarrollo de su fuerza económica. Sobre los escombros del mundo feudal crecieron rápidamente la industria y el comercio. El capitalista inglés se lanzó a la conquista del mundo.

Si la revolución inglesa no pudo ser completa, la gran revolución francesa, en cambio, representa el tipo perfecto de revolución democrática. Ya no disimula su verdadero contenido bajo el disfraz religioso, el tercer estado da la batalla en el terreno político, sus reivindicaciones son abiertamente sociales. Lucha hasta el triunfo final: la destrucción del Estado absolutista, la expropiación y el aniquilamiento de la aristocracia. La revolución surge en el momento más favorable para el cumplimiento integral de su programa. En la Inglaterra de 1648, la acumulación de capital es insuficiente, la burguesía no tiene autoridad para imponer todas sus condiciones. La burguesía alemana se levanta en 1848, cuando ya ha principiado la era del maquinismo y de la gran industria. Con asombro ve surgir a sus espaldas un proletariado lleno de ardor combativo, y, arrepentida de su atrevimiento, se refugia de nuevo en los brazos de los terratenientes prusianos, dejando al príncipe de Bismarck la tarea de cumplir su programa.

En Francia, la monarquía absoluta se había impuesto tras largas luchas contra los señores feudales. Pero luego se contentó con restringir su poder; nunca pensó en destruir el feudalismo, sino que pactó con él para oponerse a la influencia creciente de la burguesía. La aristocracia mantenía «la explotación feudal del pasado, desorganizando la fuerza monárquica del presente y corrompiendo en su germen al capitalismo audaz que no

puede cumplir con su misión, fomentar las energías, multiplicar las riquezas y crear la gran clase obrera que transformará al mundo, cuando no esté protegido contra la arbitrariedad señorial».<sup>1</sup> Los terratenientes administraban justicia; exigían de los campesinos pobres servicios personales, censos, derechos sobre la venta de sus productos en el mercado, contribución sobre la sal, etc. Las aduanas establecidas a la entrada de cada provincia y los derechos de tránsito sobre puentes y carreteras constituían un obstáculo para el desarrollo comercial. Las clases privilegiadas, nobleza y clero, que poseían cerca de las dos terceras partes del suelo, estaban libres de impuestos.

A pesar de subsistir en muchos sitios la organización de los gremios, la manufactura se desenvolvía rápidamente, al par que el comercio colonial aumentaba en los puertos. De 1715 a 1792 cuadruplicó el comercio exterior. Entre 1763 y 1778 se construyeron en los astilleros de Burdeos 245 buques, con un tonelaje total de 74.485 toneladas. En 1789, la metrópoli exportó a Antillas mercancías por un valor de 78 millones; las importaciones de azúcar, café, algodón, etc., sumaron 218 millones; 71 millones se destinaron al consumo interior, mientras el resto fue exportado después de una transformación por las industrias nacionales.<sup>2</sup> El comercio de esclavos constituía otra fuente de enormes beneficios. Entre los orígenes de la *Declaración de los Derechos del Hombre* figura también la riqueza ganada en el tráfico de carne humana. Con la fuerza económica, la burguesía de los centros comerciales y manufactureros había adquirido su conciencia de clase. Estaba cansada de mantener con sus ganancias a los parásitos feudales que integraban el Estado absolutista costoso e inservible. Sentía la necesidad de derribar este obstáculo al desarrollo normal de la producción. Para conseguirlo, patronos y obreros se unieron en un frente común. El maquinismo aún no había penetrado en la industria del siglo XVIII, predominando, en cambio, la manufactura y el trabajo a domicilio. Muchos obreros poseían pequeñas tierras, que les procuraban una parte de su sustento. Aún no era completo el divorcio entre trabajadores y medios de producción. En la manufactura, cada obrero es un especialista insustituible, dueño de los instrumentos de trabajo, mientras que en la gran industria moderna se halla sojuzgado por la maquinaria.

En la época de la revolución, la acumulación de capital había progresado lo suficiente para dar a la burguesía una ventaja decisiva sobre el feudalismo degenerado, pero aún no había creado los grandes núcleos industriales, los centros donde se forma la conciencia proletaria.

Libre de discrepancias interiores, el tercer estado pudo dar al movimiento toda su amplitud. Iniciada la ofensiva y establecido el régimen constitucional, los financieros que sostenían el ala moderada de la burguesía estaban dispuestos a transigir con la monarquía y las clases privilegiadas, contentándose con una simple limitación de los privilegios. Pero a su vez fueron arrollados por los jacobinos, que conquistaron el poder arrasando las masas pequeño-burguesas. Emplearon el terror revolucionario para destruir a sus adversarios y aniquilar la base de su dominio: la propiedad del suelo. La dictadura revolucionaria de la pequeña burguesía, que destrozó con furor todas las viejas instituciones, fue una necesidad histórica para el desarrollo posterior del capitalismo y aseguró la libertad de acción de la misma gran burguesía. La dictadura jacobina desapareció después de cumplir con su misión; y la burguesía encontró el camino despejado para em-

---

<sup>1</sup> J. Jaurés, *Histoire socialiste de la Révolution française*.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

prender la veloz carrera de acumulación capitalista. El burgués «como fanático del aumento del valor impone sin consideración a la Humanidad la producción por la producción misma, y así el desarrollo de las fuerzas productivas sociales, la creación de condiciones materiales de producción que únicamente pueden ser la base real de una forma más elevada de sociedad cuyo principio fundamental sea el desarrollo completo y libre de cada individuo».<sup>3</sup>

Para realizar este programa, la burguesía tuvo que conquistar el poder y crear el estado democrático, instrumento más conveniente para el ejercicio de su dominio, pues las nuevas formas autoritarias y totalitarias del Estado burgués son fenómenos ya de franca decadencia del capitalismo. Así se hizo posible un desarrollo más amplio de la producción, la creación de la gran industria, que es el crisol donde se forma el proletariado.

La libre competencia obliga a los capitalistas a perfeccionar la técnica de la producción para no dejarse vencer en la incesante lucha por los mercados; la burguesía tuvo que estimular las ciencias. La industria necesita técnicos y obreros calificados: el Estado burgués tuvo que monopolizar la enseñanza y hacerla obligatoria. «Los maestros alemanes nos han vencido», dijeron los burgueses de Francia después de la guerra de 1870. En la época feudal, la Iglesia se había opuesto a la generalización de la enseñanza, pero la sociedad capitalista, que no sabía qué hacer con los analfabetos, no tardó en darse cuenta que su enseñanza obligatoria era un instrumento de idiotización colectiva tan poderoso como la ignorancia obligatoria en tiempos de dominación frailuna: en el Estado burgués, uno de los deberes de la escuela (y no el menor) es la preparación moral de la carne de cañón para la carnicería imperialista.

Pero el capitalismo, como toda formación histórica, muere de las consecuencias de su propio desarrollo. De elemento revolucionario se ha convertido en fuerza representativa de la reacción. En vez de aumentar la producción, la disminuye. La misma ciencia que impulsó en sus primeros tiempos se levanta contra él y pone de manifiesto sus contradicciones, lo incoherente y caótico de sus procedimientos. Los más acerbos críticos de la burguesía (como Carlos Marx) salen de su propio seno. Bañado desde su nacimiento en la sangre y las lágrimas de los campesinos expropiados, de los negros deportados y vendidos, sosteniéndose gracias a la miseria de las masas trabajadoras, el capitalismo crea la clase obrera, instrumento de su propia muerte. El proletariado dará al traste con su sistema.

En la última de las revoluciones clausurará el ciclo milenario de lo que podemos llamar la prehistoria humana, caracterizada por la explotación del hombre por el hombre y el desarrollo anárquico e inconsciente de las fuerzas productivas. La clase trabajadora implantará la verdadera igualdad entre los hombres y la dirección científica de la producción.

---

<sup>3</sup> Carlos Marx, El capital, I

# I. LA BURGUESÍA ESPAÑOLA

## 1. DIOS, PATRIA, REY

### *Desde 1481 hasta 1788 hubo:*

Condenados quemados en persona.....	34.382
Condenados quemados en efigie.....	317.690
Encarcelados, reclusos y despojados de casi todos sus bienes .....	291.450
Total de las condenaciones aflictivas que forman 1.240 anuales durante 2 y 3/4 siglos.....	343.522

*(Moreau de Jonnés: Estadística de España)*

La España medieval fue la cuna del capitalismo. La piratería se había adueñado de los mares del Norte, en cuyas orillas dominaba el feudalismo, cuando en las costas mediterráneas se inició una nueva era. El florecimiento de los puertos peninsulares coincidió con la prosperidad de Génova, Pisa y Venecia. Como en Italia, el incipiente capital comercial ya había comenzado a crear manufacturas, cuando en el resto de Europa predominaban las formas precapitalistas de producción, con su estricta organización gremial del artesanado. Desde el siglo XIII, la manufactura de tejidos de lana establecida en Cataluña vende sus productos a Inglaterra, Holanda y a las mismas ciudades italianas. En el siglo XI los árabes empiezan a elaborar papel en Ceuta. En el siglo XII fundan la primera manufactura europea en Játiva, y en la siguiente centuria esa industria se extiende a Manresa, Alicante y Alcoy. Sevilla posee manufacturas de seda que todavía en 1519 ocupan a unos 130.000 obreros. El movimiento del puerto de Barcelona es intenso. Antes que en otras regiones florece el comercio en la ciudad condal, gracias, sobre todo, a una administración por entonces ejemplar, que siglos antes de constituirse la Liga hanseática del Norte protege eficazmente la libertad del comercio. Desde 1068, el usatje «omnes quippe naves» garantiza a todos los ciudadanos, sin distinción de nacionalidad, el libre acceso del territorio y la protección de las naves que vinieren a Barcelona.

En el siglo XIII, los mercaderes catalanes empiezan a establecer colonias en las ciudades de ultramar y gracias al apoyo consular gozan de un trato de favor. El volumen de las transacciones bancarias que corren al margen de la actividad comercial da origen en 1400 a la creación de la «Taula de Cambi», primer banco público con garantía de la ciudad. Al año de su fundación ya cuenta con más de 500 depósitos.

Los progresos de la producción agrícola no fueron menos notables. En una parte del

territorio los árabes habían realizado una labor ejemplar y transformado en regadío grandes extensiones de terreno árido e improductivo. Esta prosperidad material, la convivencia y colaboración en el mismo territorio de tres nacionalidades distintas, forman la base del florecimiento de ciencias y artes en aquella época. España fue el primer país donde frente a la sociedad feudal se afirmaron fuertes núcleos de población industrial, gérmenes de un orden nuevo; la península se había adelantado al resto de Europa.

Pero al mismo tiempo se lleva a cabo la Reconquista. En incesantes guerrillas «se ensancha Castilla», es decir, los dominios de los señoritos castellanos. La nobleza constituye el principal poder guerrero; a pesar de la rivalidad existente, el rey en sus expediciones no puede prescindir de su ayuda; estos servicios se pagan: las mejores tierras arrebatadas a los musulmanes fueron a parar a manos de los señores feudales. Se fortaleció el feudalismo castellano, al mismo tiempo que se dio el primer paso hacia la formación de los actuales latifundios.

Al finalizar la Edad Media se enfrentan en España las mismas tres fuerzas que en otros países europeos: la aristocracia, la burguesía de las ciudades y la monarquía que lucha para cumplir con su misión unificadora y centralizadora y crear el Estado absolutista, fundamento de las naciones modernas.

En Francia, la monarquía, con la ayuda del estado llano, venció y humilló a la aristocracia, para luego aliarse con ella y usarla como un freno contra el avance de la burguesía. Pero la burguesía tuvo la fuerza de arrollar los obstáculos y con ellos la monarquía absoluta. Igualmente sucedió con la revolución puritana en Inglaterra. La nueva monarquía que nació del golpe de Estado de Guillermo de Orange —la mal llamada «revolución gloriosa»— estaba ya casi totalmente identificada con la causa del capitalismo, como luego la monarquía de julio en Francia. La burguesía adquiere cada día mayor influencia en el Gobierno, y paulatinamente la monarquía, como la aristocracia, pasa a ser un mero apéndice de la sociedad burguesa, una lujosa fachada de auténtico estilo gótico que la burguesía británica mantiene con su dinero para enseñarla al extranjero maravillado, pero nada más que una fachada.

Los monarcas que más se distinguieron en la defensa de las instituciones feudales fueron los Habsburgo. Las horcas y las hogueras señalan su paso a través de la Historia; fueron grandes pacificadores del espíritu. En España mandaron durante dos siglos. Carlos I subió al trono con el apoyo y los aplausos de los magnates feudales. Aplausos plenamente justificados por el uso que los Austrias hicieron del poder.

En su política de ayuda al feudalismo y a la reacción europea, el emperador Carlos debía tarde o temprano tropezar con la resistencia burguesa. La fuerza económica que ya había adquirido el estado llano le capacitaba para la defensa consciente de sus intereses, y éstos estaban diametralmente opuestos al mantenimiento de una corte parasitaria integrada por camarillas de señoritos ladrones. La burguesía de las ciudades veía con disgusto que el monarca malgastase sus contribuciones en expediciones guerreras a Italia y a Alemania, cuya finalidad no era de satisfacer los anhelos de mercaderes y fabricantes españoles. Las Cortes votaban los subsidios a regañadientes. El rey tenía que valerse de artificios y estratagemas, atar a las oposiciones por medio de promesas para conseguir su aprobación.

En 1520, ausente el monarca, las exacciones de la camarilla se hicieron intolerables. Por

fin, estalló el inevitable levantamiento. La sublevación de los Comuneros no tuvo en su comienzo un carácter de clase bien definido. Fuerzas reaccionarias luchaban al lado de los revolucionarios; nobles y caballeros empobrecidos se sumaron al estado llano. En Alemania combatieron separadamente los hidalgos pobres encabezados por Franz von Sickingen y aldeanos de Tomás Münzer; aquí se juntaron y se pusieron de acuerdo sobre un programa mínimo de lucha contra la camarilla real, compuesta en su mayoría por nobles flamencos. Exigían que el rey acordara no dar cargos públicos a los extranjeros; que no saliera oro ni plata del reino, sino que sirviera para fomentar las industrias nacionales, y que no se pudiera arrendar el cobro de los tributos. Pero, iniciada la sublevación y logrados los primeros éxitos, el programa fue evolucionando en un sentido abiertamente revolucionario. Se añadió la reglamentación de la Casa Real y sus gastos — punto que iba a tener tanta importancia al desencadenarse la revolución inglesa— y se acordó proceder contra los que tratasen de alterar las leyes del reino; se manifiesta, pues, la voluntad de resistir a las usurpaciones y atropellos de la nobleza y del poder real.

Frente a estas reivindicaciones, Carlos muy hábilmente intenta dividir a los sublevados fingiendo acceder a las dos primeras peticiones, y los hidalgos, creyendo haber logrado sus propósitos, se desolidarizan con el movimiento. Hasta entonces, la grandeza había guardado la neutralidad frente a la insurrección, marcando su disconformidad con la preponderancia de los nobles flamencos en la Corte. Pero no tardó en salir de la expectativa. «Cuando las ciudades reprodujeron sus antiguas quejas, cuando soñaron con reivindicar los dominios, la nobleza tomó las armas y triunfó en su provecho y en el de don Carlos. Sus intereses estaban estrechísimamente unidos en esta circunstancia. Todo dependía de la forma en que Carlos supiera aprovechar la victoria. La nobleza y las ciudades quedaron en su poder, unos como sus partidarios, otros como rebeldes vencidos.»<sup>4</sup>

Carlos de Habsburgo y Borgoña no desaprovechó el triunfo, logrado gracias a la astuta táctica del «divide et impera» que, desde los tiempos remotos del emperador Rodolfo, los Habsburgo practicaban tan acertadamente para ensanchar sus dominios, con asombro de sus émulos, los demás monarcas absolutos de Europa. La insurrección de los Comuneros, intento sofocado de revolución burguesa, había puesto en evidencia el peligro que corrían las clases feudales y la misma monarquía en cuanto se identificara con ellas, al dejar que las ciudades se desarrollasen libremente. Frente a la extraordinaria combatividad del tercer estado, el pánico se apoderó de los ánimos. La monarquía y la aristocracia tenían que estar unidas contra el enemigo común. Hacía falta una amplia acción represiva y preventiva, quirúrgica y profiláctica. Había que destruir los efectos y las causas. Desde entonces, la Historia de España es la historia de la represión.

Después de la derrota de Villalar se organizan matanzas en masa. A pesar del «perdón general» de 1552 se sigue ejecutando a los sublevados. En Valencia, donde los moriscos se habían levantado contra la gran nobleza absentista, expulsando al virrey, perecieron cerca de 12.000 personas. En Mallorca, el pueblo había pedido la abolición de los censos: fueron ejecutados 200 rebeldes. Pero el movimiento revolucionario tuvo consecuencias más profundas que esta represión ocasional: imprimir un rumbo definitivo a la política monárquica.

---

<sup>4</sup> L. Ranke, España bajo Carlos V. Ed. francesa, París, 1873.

La solidaridad con la Iglesia se hizo cada día más aparente. Los monarcas organizaban costosas cruzadas contra los herejes, intervenciones armadas contra los rebeldes al orden feudal —y a la Iglesia católica— de Alemania, Países Bajos e Inglaterra, ayudándoles el clero mediante la concesión de empréstitos. A pesar de algunas divergencias superficiales con el poder real, los grandes señores feudales ya no sufrieron ninguna mengua en sus privilegios. Había quien conservaba treinta mil súbditos. La renta del duque de Medina Sidonia sumaba unos 130.000 ducados.

La potencia de las ciudades hallaba su expresión en las Cortes. Se procedió a restringir su influencia. Por la compra de votos y la coacción se llegó a convertir las sesiones en una mera ceremonia para aprobar todo lo que el rey quisiese. Los diputados sólo conservaron el derecho de formular ruegos en la sesión final. Sus deseos platónicos reflejan las ansias de una clase moribunda que lucha desesperadamente contra el naufragio de su economía. Sus quejas vuelven con insistencia; las Cortes nunca dejaron de protestar contra la venta de hidalguías, practicada para reunir fondos, pero que traía consigo la exención de tributos; contra la venta de jurisdicciones perpetuas; contra las trabas que sufría el comercio con las Indias. Pidieron la reducción de los gastos de la Casa Real, la disminución de conventos y reforma de los abusos en la jurisdicción de los inquisidores.

En aquellos tiempos, toda corriente social se traduce por un movimiento religioso. La herejía es profundamente revolucionaria y antifeudal; se ha dicho que el derecho de libre examen que propugna no sería concebible sin el derecho de libre competencia. El feudalismo, en cambio, encuentra su ideología en el rígido dogma católico; la Iglesia romana, con sus jerarquías, es la más auténtica de las instituciones feudales. La solidaridad entre la monarquía y la reacción feudal tiene como consecuencia inmediata la identidad de criterios con el clero. De ahí la Inquisición, órgano represivo destinado a extirpar los males de raíz. Existió en otros países, en Italia, en Francia, pero en ninguna parte tuvo la misma amplitud ni subsistió tanto tiempo (en España hasta 1834, es decir, 45 años después de la Revolución francesa).

Por primera vez en la Historia se manifiesta el terror organizado de una clase contra otra. La Inquisición española es un instrumento absolutamente perfecto creado por el feudalismo para aniquilar a sus adversarios moral, física y económicamente; esta venerable institución nada tiene que envidiar a los tribunales excepcionales o de urgencia de la dictadura capitalista y fascismo actuales. La herejía no es más que una forma de rebeldía burguesa, aunque la más significativa por entonces. Pero el Santo Oficio es omnipotente.

«Bajo Felipe II, la Inquisición interviene en los negocios, el comercio, las artes, los impuestos y la marina. ¿Quién hubiera podido sustraerse a su jurisdicción, cuando ella declaró herejía el hecho de vender caballos o municiones a Francia?... Este Tribunal, según sus fines y su significado, es ante todo una institución política.»<sup>5</sup>

Además de su eficacia como instrumento de la dominación feudal, la Inquisición resulta un excelente negocio para la Corona. Aparte su interés en conservar la pureza de la Santísima Fe cristiana, este tribunal no menosprecia tampoco los bienes de este mundo; si bien muestra mucho cariño en enderezar por el fuego sagrado las almas de los pecadores, no deja por eso de manifestar la más cristiana solicitud para con sus haciendas.

---

<sup>5</sup> *Ibídem.*

Las confiscaciones de bienes pronunciadas por el Tribunal se cumplen estrictamente y sin excluir los donativos que los reos hicieron antes del proceso. En los meses transcurridos desde el advenimiento de Carlos I hasta el año 1522, el Tesoro Real se llevó un millón de ducados que le produjo tan sólo la confiscación de bienes de los que voluntariamente habían confesado su herejía.<sup>6</sup> El oprobio de la condena recae sobre la familia del reo; sus hijos y hasta sus sobrinos quedan incapacitados para desempeñar cualquier cargo público; su casa es arrasada para impedir todo resurgimiento del espíritu de rebeldía. La Inquisición cumple celosamente con su misión aniquiladora, sin descuidarse de los más mínimos detalles. Toda la admirable organización de la Iglesia se halla movilizada al servicio del terror; nunca Estado alguno dispuso de policía tan ejemplar.

La herejía protestante, como expresión de la disconformidad burguesa, no llega a adquirir gran importancia en España. Los judíos y moriscos, en cambio, constituyen la parte más activa de la población. Negociantes, artesanos y cultivadores infieles representan la mejor fuerza del estado llano, los gérmenes de la futura burguesía. Los Reyes Católicos habían iniciado la regresión, expulsando a los judíos que se negaban a aceptar el cristianismo. Salieron de España unos 300.000 (800.000, afirman algunos), llevándose parte de sus riquezas; se establecieron en Burdeos, Hamburgo y principalmente en los Países Bajos y contribuyeron al desarrollo comercial de aquellos países. Quedaban los judíos convertidos a la fuerza y los moriscos. El Estado feudal se había visto amenazado en sus fundamentos y no podía ya detenerse ante estos obstáculos. Para los judaizantes que restaban bastó el Santo Oficio. Los moriscos, en cambio, formaban núcleos compactos de población, cultivando terrenos fértiles. Su número aumentaba al par que su riqueza; constituían un foco de resistencia y una posible amenaza para el orden feudal. Éste debía necesariamente intentar eliminarlos, aunque fuera a costa de un grave perjuicio para la economía, pues tales razones nunca han podido detener a una clase amenazada de perder su dominio. Una clase dominante —sea cual fuere, aristocracia o burguesía— no se hace el haraquiri, sino que trata de prolongar y salvar su vida por todos los medios. El feudalismo español se defendió con innegable acierto. Deshechas las Comunidades, son los moriscos los que más atemorizan a los señoritos de la Corte. Les prohíben la tenencia de armas y les hacen objeto de un sinnúmero de vejaciones. Un decreto de 1566 les prohíbe el uso de la lengua arábiga, les ordena entregar los libros arábigos y tener las puertas de sus casas siempre abiertas, a fin de facilitar su vigilancia. En 1568 se sublevan los de Granada y son aplastados tras una lucha cruenta. Juan de Austria y Requesens mandan ahorcar a los prisioneros, venden como esclavos a mujeres y niños y decretan deportaciones en masa. A pesar de esta represión ejemplar subsistió el espíritu de insubordinación y siguió el miedo de la Corte.

Finalmente, en 1609-1610, reinando el duque de Lerma y su camarilla, se procedió a la operación definitiva, expulsando a la población entera. Arrojaron de la península más de medio millón de moriscos, que constituían cerca de la décima parte de su población total. La expulsión de los moriscos fue la coronación de la obra destructora de la reacción española que empezó por la instauración del Santo Oficio y la expulsión de los judíos. Los decretos de 1609-1610 entregaron el sur de España a los señores de horca y cuchillo, de cuyas garras no ha podido librarse hasta hoy día.

No existe economía que pueda sufrir una amputación de esta importancia sin desangrar-

---

<sup>6</sup> *Ibidem.*

se. Simultáneamente, de país progresivo, España se va convirtiendo en el baluarte del feudalismo. Mientras en todas partes nace una nueva sociedad, ella sigue envuelta en la sombra medieval. La reacción internacional busca y encuentra su principal apoyo en el feudo de las Católicas Majestades. Detrás de las murallas sombrías de El Escorial se traman las intervenciones contra los rebeldes del Norte. Con la riqueza arrebatada a los mercaderes y fabricantes de España se construye *la Invencible* para aniquilar a los de Inglaterra, se emprende la guerra contra los sublevados de Holanda y se subvenciona la «Liga» reaccionaria en Francia. «España» se había convertido en sinónimo de «reacción».

He aquí el juicio de Marx:

*«En todas partes en el siglo XVI creáronse grandes monarquías sobre las ruinas de las clases feudales, la aristocracia y las ciudades. En los demás grandes Estados de Europa, la monarquía absoluta apareció como un centro de civilización, como un agente de unidad social. Fue como un laboratorio en el cual los distintos elementos de la sociedad se mezclaron y se transformaron, hasta tal punto, que les fue posible a las ciudades sustituir su independencia medieval por la superioridad y la dominación burguesas. En España, por el contrario, la aristocracia cayó hasta un nivel extremo de degradación, sin dejar por ello de conservar los peores privilegios, mientras que las ciudades se veían privadas de su poder medieval, sin conservar ninguna influencia. Desde la fundación de la monarquía absoluta, estas últimas vegetaron en un estado de decadencia progresiva...»*

*«La monarquía absoluta, hallando como halló en España un material opuesto por su naturaleza al centralismo, hizo todo cuanto dependió de ella para entorpecer el aumento de los intereses sociales, que trae aparejada consigo la división nacional del trabajo y una circulación industrial múltiple, y así suprimió la única base sobre la cual podía ser fundado un sistema unificado de gobierno y de legislación común. He aquí por qué la monarquía absoluta española puede más bien ser equiparada al despotismo asiático que comparada con los otros Estados absolutistas, con los cuales tiene muy poca analogía. España se convirtió, lo mismo que Turquía, en un conglomerado de provincias mal gobernadas, con un soberano nominal al frente. En las provincias, el despotismo tomó distintas formas, subordinadas al modo como virreyes y gobernadores interpretaban arbitrariamente las leyes».*<sup>7</sup>

La monarquía española no dio, como otras monarquías, el primer paso hacia la desaparición del feudalismo, sino que ambos se aliaron frente a un tercer estado precoz, y la monarquía se convirtió en el mejor instrumento de gobierno de los señores feudales. España, primer país en iniciar su unión nacional, se halla luego incapacitada para llevarla a cabo. Como se ha visto, es el tercer estado que ha de pagar esta estabilización feudal. Por la amputación de sus mejores miembros y las quemaduras repetidas que la Inquisición produce en su cuerpo, se ve privado de todos sus medios de ataque y de defensa; ya no puede intentar alzarse contra el feudalismo, se halla esposado e impotente para oponerse a la opresión. No puede acumular nuevas fuerzas para reconstituir lo perdido, porque sobre él, exclusivamente sobre sus espaldas, pesa todo el aparato estatal parasitario, la carga abrumadora del feudalismo explotador; no se le permite desarrollarse, ape-

---

<sup>7</sup> Carlos Marx, *La revolución española* (1854). Madrid, 1929.

nas llega a vegetar.

Las dificultades que en la Francia prerrevolucionaria existían para la industria y el comercio y que finalmente motivaron el estallido de 1789, no son comparables a las que tenían que soportar en España.

Toda clase de impuestos hacían imposible el establecimiento de nuevas industrias: la circulación de mercancías estaba sujeta a derechos de entrada y de tránsito por los límites de las provincias y al impuesto sobre los mercados percibido por las corporaciones y administraciones municipales; el vendedor tenía que pagar un 10 % de derecho de alcá-bala por toda mercadería vendida o cambiada.

«En 1650, los derechos de aduana eran del 10 % y frecuentemente había muchos que pagar para hacer llegar las materias primas o los productos de una provincia litoral hasta el interior del reino...

»La seda pagaba un 14 % de su valor en la entrada de la ciudad de Sevilla, y otro tanto de la primera venta en telas. En Granada era del 60 % antes de estar tejida.»<sup>8</sup>

De los 16.000 telares de seda que en 1519 contaba Sevilla, apenas quedaban unos 405 en 1673. Valencia, que antes de la expulsión de los moriscos reunía 100.000 casas, en 1787 tiene 100.000 habitantes.<sup>9</sup> Al comienzo del siglo XVIII no quedan en España más que siete millones de habitantes. Las vías de comunicación se hallan totalmente abandonadas. El rey Felipe V necesita 25 días para efectuar el viaje de Irún a Madrid. La flota mercante, antes de 3.000 buques, se reduce a menos de la tercera parte. Al lado de la más tiránica represión contra la industria nacional reina libertad absoluta para las industrias extranjeras. Los comerciantes extranjeros tienen sus lonjas (por ejemplo, en Barcelona), mientras a los españoles se les niega este privilegio. Holandeses, ingleses y franceses se hallan, pues, doblemente favorecidos, por estar más libres de impuestos, pesquisas, inspecciones y confiscaciones de toda clase. Los productores y negociantes protestaron con frecuencia. Pero como ya no representaban ningún poder económico, todas sus protestas fueron inútiles; les faltaba la fuerza indispensable para imponer su criterio. Los humildes ruegos y peticiones que las Cortes, desposeídas de toda influencia, aún osaban someter al monarca, nunca tuvieron ninguna consecuencia. Fue en Cataluña donde se conservaron los más importantes restos de industria y comercio. Pudieron mantenerse más tiempo gracias a la incompleta centralización de la monarquía española, que les dejó una ficción de autonomía. Una diputación de catalanes contestó debidamente al ministro de Felipe IV, conde-duque de Olivares:

*«Para remediar nuestros males, los españoles deberíamos quedarnos en nuestra propia casa, repoblar el reino, cultivar nuestros campos, fortificar nuestras ciudades, abrir nuestros puertos al comercio y restablecer nuestras fábricas. En esto deberíamos emplear los tesoros de América y no en guerras insensatas y vergonzosas. ¿Para qué perpetuar en Alemania una lucha mortífera a costa de nuestra sangre y de nuestros tesoros? ¿Qué provecho sacamos de la guerra de los Países Bajos, de ese pozo insaciable que engulle nuestros soldados y nuestras fortunas?».*<sup>10</sup>

Contra la política reaccionaria de los reyes españoles luchaban todas las fuerzas progre-

---

<sup>8</sup> Moreau de Jonnés, Estadística de España. Barcelona, 1835.

<sup>9</sup> *Ibidem*.

sivas de Europa, anunciadoras de un orden nuevo. Era natural que en esta lucha no pudiera vencer la causa antihistórica que en el mundo representaba España, pese a sus enormes esfuerzos, pese a su derroche de tesoros y a su menosprecio de las vidas humanas. La *Invencible* tenía que sucumbir ante los ingleses. Y sus mejores provincias, mal incorporadas y asimiladas por la incapacidad centralizadora de una monarquía entregada al feudalismo, tenían que desprenderse de ella, como las ratas abandonan el buque que empieza a hundirse. El malestar periférico, uno de los síntomas más característicos de la decadencia española, cobra cada día mayor extensión. Contra la regresión que representa el poder central se alzan Flandes, Portugal y Cataluña, menos afortunada, donde los segadores no logran conquistar su independencia. Más tarde siguió América. Se ha querido dar a la guerra de independencia sudamericana el sentido de una revolución burguesa-democrática, parecida a la guerra que los Estados Unidos sostuvieron con Inglaterra. Si esto fuese verdad, ¿por qué hoy día la mayoría de los países hispanoamericanos carecen de capital y de industria para transformar sus materias primas, hallándose, en cambio, bajo la férula de los financieros de Wall Street y sus acorazados? Indudablemente porque hubo diferencias fundamentales entre los métodos de colonización inglés y español. Los colonos que salieron de Inglaterra a apropiarse de las tierras norteamericanas eran buenos ciudadanos británicos libres; libres sobre todo de escrúpulos, cuando un negocio o una empresa les prometía algún beneficio. Vendedores de negros, exterminadores de indios, piratas («merchant adventurers», como decía entonces) y más tarde industriales, siempre mostraron la misma actividad, el mismo espíritu de lucro, admirable por su perseverancia y que fue un gran vehículo de la civilización. El «God» de los puritanos, como el de los judíos, difiere mucho del «Dios» español; cuando ellos hablaban de «God», pensaban «plus valía», y a la nueva Inglaterra le dieron el orgulloso nombre de «God's own country»; querían decir que en esas tierras iba a nacer la mayor potencia capitalista del mundo.

La colonización española, en cambio, impuso al nuevo continente la estructuración feudal de la madre patria, con todos sus defectos, su caciquismo, sus tribunales de Inquisición. Mientras los puritanos fundaron industrias y emprendieron obras públicas, los españoles construyeron un sinnúmero de iglesias y de conventos. Hubo en América, y los hay todavía, los mismos frailes, monjas y señoritos que en España, un poquito más brutos quizá. Probablemente, la guerra de independencia sudamericana no fue más que la manifestación de la rivalidad entre la aristocracia criolla y los funcionarios del rey; oligarquía contra oligarquía.

Siempre y en todas circunstancias, colonización significa robo. Pero en Inglaterra el producto de los robos sirvió para aumentar la fuerza productiva del país, estimular el trabajo y acelerar la acumulación capitalista. Con el oro arrebatado a los indígenas martirizados se funda la gran industria inglesa. El algodón de las colonias entra en las fábricas de Manchester para ser hilado.

En España sucedió todo lo contrario. Gran parte de las riquezas producidas por el robo colonial salieron de la circulación, y con ellas se sostuvieron las clases feudales, se enriqueció la Iglesia y aumentó sus joyas la grandeza. Se puede decir que la mayor parte de los géneros y metales que producían las colonias sirvió para pagar los productos manufacturados importados del extranjero. En vez de ser un estímulo para la industria nacio-

---

<sup>10</sup> Manuel Pugés, *Cómo triunfó el proteccionismo en España*. Barcelona, 1931.

nal —si a ésta no se la hubiese aniquilado—, la producción colonial española no enriqueció sino a los fabricantes franceses e ingleses. Más de las tres cuartas partes de las mercancías consumidas en España en el siglo XVIII eran de fabricación extranjera y con frecuencia elaboradas con materias primas españolas.

Las estadísticas muestran este aniquilamiento de las fuerzas productivas. Según Madoz, la población productiva en 1803 era de 6.650.000 habitantes, y la improductiva, de 3.617.000. La nobleza la componían 1.440.000 individuos; el clero, 203.298. La sociedad feudal española despreciaba el trabajo, como una cosa indigna. Reservaba todos sus favores a los hidalgos (hoy «señoritos»), primitivamente unos ladrones armados que representaban la fuerza guerrera feudal, pero paulatinamente perdieron esta función, para no ser más que unos perfectos parásitos, cuya vida daba a los demás el ejemplo de la pereza. Al mismo capítulo pertenece la extraordinaria extensión de los conventos, contra la cual las Cortes protestaron repetidas veces. A fines del siglo XVIII, la renta anual del clero sumaba 600 millones de reales (sin contar el diezmo), que corresponden a un capital igual a la cuarta parte del capital territorial total de España. Pero «en 1760 juzgaba Moncada que tres millones de españoles no llevaban camisa, por no tener dinero para comprarla.»<sup>11</sup>

Como consecuencia del aniquilamiento económico, la cultura había caído a su nivel más bajo. En el curso del exterminio organizado contra el espíritu no conformista, el peligro que constituía la penetración de las ideas europeas en España no había escapado a la sagacidad inquisitorial de Felipe II. La Pragmática de 1559 prohíbe a los jóvenes españoles ir a estudiar en las universidades extranjeras. España se quedó sola con su dolor y su ignorancia. Los Pirineos constituían una barrera más infranqueable que cualquier desierto sahariense. Como en los tiempos de antaño, en las universidades españolas se enseñaban todas las ingeniosidades de la escolástica medieval. Los descubrimientos de las ciencias, las innovaciones de la técnica pasaron inadvertidos; no se notaba su ausencia, pues no había industria ni ramo alguno de la producción donde aplicarlos.

Todavía en 1808 (treinta años después de la Revolución francesa) se veía en las puertas de las iglesias la lista de obras prohibidas por la Inquisición; entre ellas figuraban, naturalmente, las obras de Pope, Locke, los enciclopedistas y... el Informe sobre la ley agraria, de Jovellanos. Se calcula en poco más de 600.000 personas sobre 10.350.000 las que en 1803 habían recibido una educación regular.<sup>12</sup>

La monarquía española podía gozar de su triunfo, que nadie ya era capaz de arrebatarse: el divorcio entre España y la Historia era patente. No entra en nuestros propósitos analizar si tal fue el deseo consciente de los reyes; los personajes que rigen nuestra prehistoria humana, raras veces tienen conciencia de sus actos; son instrumentos ciegos de fuerzas que desconocen. Quisieran o no, los reyes españoles, poniéndose prematuramente al servicio de la reacción feudal, convirtieron un país lleno de esperanzas en un conglomerado de cábilas más o menos míseras, más o menos pintorescas, pero al fin cábilas.

---

<sup>11</sup> Moreau de Jonnés, *ibídem*.

<sup>12</sup> *Ibídem*.2.

## 2. POR LA SENDA CONSTITUCIONAL

Feudalismo de un nuevo género, cien veces más repugnante que el feudalismo guerrero de la Edad Media, y por virtud del cual se esconde bajo el ropaje del Gobierno representativo una oligarquía mezquina, hipócrita y bastarda...

(Azcárate)

Gobernar contra la Historia, a la larga, es imposible. Aun la más fuerte muralla de China no resiste los cañonazos del progreso material. La civilización industrial se impone sea como fuere, a latigazos o a golpes de empréstito.

El capitalista se halla en busca constante del mayor beneficio; es el único principio que lo rige, la única ley que reconoce. Por esta misma ley, los beneficios constantemente tienden a igualarse. El capital siempre ha de estar movilizado para invadir las posiciones menos defendidas; o concretamente: los capitales de un país fuertemente industrializado donde hay abundancia de capitales buscan y encuentran colocación de mayor provecho en países de menor desarrollo industrial. El capital emigra, se internacionaliza; el sistema capitalista se parece a una mancha de aceite que pronto cubre el globo terrestre. La codicia del capitalista no conoce límites; para satisfacerla, atraviesa las más altas montañas, cruza los más extensos océanos y alegremente envía a la matanza a sus propios hijos cuando así lo exigen sus intereses. Pero el capitalista no arriesga sus capitales sin tener las debidas garantías. Las fábricas del país industrializado producen los cañones más eficaces, aviones de gran precisión, potentes acorazados y submarinos. El capitalista que coloca sus capitales en países lejanos, sabe perfectamente que en momentos de peligro no le han de faltar los medios coercitivos y que su gobierno aguarda sus órdenes y no vacilará en emplear a fondo toda la gama de instrumentos, productos de su industria pesada. Tampoco lo ignora el agraciado indígena al que se trata de «civilizar». El imperialismo, sin más ni más, expropia a las tribus primitivas de África y las hace trabajar bajo el látigo de sus sargentos, mientras «a las razas cristianas que se han retrasado les amonesta, les coloniza industrialmente el territorio de la metrópoli y les impone diplomáticamente un derecho de excepción a favor de sus nacionales, que es decir de los colonos».<sup>13</sup> Ejemplo: la casi totalidad de las repúblicas americanas y Portugal.

Al principio, en el siglo XIX, la economía española destrozada se encuentra en un estado de absoluta inferioridad. Al lado de España, el mismo Portugal aparece como un país próspero: produce más y mejor, tiene menos analfabetos.

Sin embargo, en la España actual se notan cambios importantes. Sobre todo el desarrollo parcial de su capacidad productiva, debido no únicamente a la intervención de capital imperialista —y, por consiguiente, la presencia de todas las condiciones objetivas para dar el paso decisivo hacia el establecimiento de un nuevo régimen: el de las masas trabajadoras. De país feudal, España se ha convertido en país semicapitalista y no ha pa-

---

<sup>13</sup> Joaquín Costa, *Oligarquía y caciquismo*.

sado a ser feudo exclusivo de ninguna potencia imperialista, sino que ha conservado hasta cierta autonomía política. Al observador de la Historia no se le permite ser demasiado simplista: la España de hoy no es Francia, pero tampoco, como lo creen algunos, se puede equiparar a Portugal, a pesar de la colección de Gibraltares que adornan su cuerpo.

Durante siglos, la monarquía aliada del feudalismo se dedicó a gobernar contra la Historia que reconoce la necesidad del desarrollo capitalista, y, sin lograr su aplastamiento definitivo, logró contenerlo, entorpeciendo.

El capitalismo español, que empieza a manifestarse en el siglo xix, no es producto espontáneo de la providencia, sino consecuencia —muy tardía en verdad— de una serie de hechos que se vinieron produciendo desde siglos atrás. Finalmente logra imponerse por encima de una política retrógrada que quiere perpetuar en España el estado de cosas del siglo xv. Esta serie de hechos forman lo que se puede llamar la prehistoria del capitalismo, durante la cual se crean las condiciones necesarias a la producción capitalista. En la primera parte de *El Capital*, Marx hace un análisis de esta «acumulación originaria». Son dos los elementos indispensables para la producción capitalista: 1.º, el propietario de dinero, medios de producción y de subsistencia que quiere incrementar los valores que posee, comprando la fuerza de trabajo ajena; 2.º, el trabajador «libre». El trabajador libre no forma parte, como el esclavo y el siervo, de los medios de producción, no se halla bajo ninguna tutela feudal, tiene entera libertad de elegir su domicilio, pero también se encuentra libre de toda propiedad, no posee ningún medio de producción, ningún instrumento de trabajo; se diferencia, pues, fundamentalmente del campesino pequeño propietario. El trabajador «libre» es el hombre desligado de todo y desnudo, tal lo parió la naturaleza, listo a ser echado a la hoguera de la explotación: es el proletario. La prehistoria capitalista (la acumulación originaria) se reduce a la separación del productor y de los medios de producción y se caracteriza por la abolición de la servidumbre en el campo, la transformación gradual de la soberanía feudal en propiedad privada del suelo, la destrucción de la preponderancia de los gremios en la ciudad y, sobre todo, por la expropiación de grandes masas de campesinos que, privados de sus medios de producción, forman la base del futuro proletariado y, separados de los medios de subsistencia, son los más importantes consumidores del mercado interior de la joven industria.

Marx estudia el transcurso de este proceso en Inglaterra, donde en el siglo xv predomina aún el régimen feudal de la propiedad. Los pocos jornaleros son al mismo tiempo pequeños propietarios, o por lo menos disfrutaban de las tierras comunales. Al principio del siglo XVI florece la manufactura lanera en Flandes. La aristocracia inglesa, integrada por elementos nuevos, después del exterminio de la nobleza en las anteriores guerras civiles, tiene ya un espíritu de lucro típicamente burgués; para realizar mayores beneficios transforma en pasto de ovejas los terrenos cultivados y expulsa a los campesinos. La Reforma, a su vez, expropia los bienes de la Iglesia y de los monasterios, que habían sido el principal baluarte de la propiedad feudal. Ricos burgueses y favoritos de la corte real adquieren las tierras. Durante el siglo XVII desaparecen los «yeomen» (campesinos libres) y son reemplazados por arrendatarios a corto plazo. En 1800 acaba la liquidación de la propiedad comunal, que culmina en los «Bills of inclosure of Commons», transformando la primitiva propiedad común del suelo en moderna propiedad privada del terrateniente. Por último, el famoso «Clearing of Estates» (siglos XVIII y XIX), que

permite destruir las viviendas de los campesinos en los latifundios y expulsar a los habitantes. Así, la duquesa de Sutherland, en Escocia, mandó a la fuerza pública que desalojase a 1.500 cultivadores para transformar en pasto 794.000 acres de tierra cultivada, que desde antiguo pertenecían al clan entero.

Al iniciarse en el siglo XVI la expropiación y expulsión de las masas campesinas, la industria de las ciudades no había alcanzado el volumen suficiente para poderlas asimilar. El país se llena de una multitud de vagos y maleantes, contra los cuales los reyes dictan medidas severísimas. Una ley de Enrique VIII los amenaza con el látigo, les manda cortar una oreja en caso de reincidencia y ahorcarlos cuando son sorprendidos por tercera vez. Eduardo VI agrava las penas y ordena que el vagabundo sirviera como esclavo al que lo denuncie. Transcurre más de un siglo hasta que, roto por la revolución el régimen feudal del campo y el gremial de la ciudad, el capital usurero y comercial primitivo puede transformarse en capital industrial; el paso de los campesinos despojados al proletariado se hace menos difícil: ha comenzado la era capitalista.

Referimos tan detenidamente el análisis de Marx porque el proceso de acumulación originaria en España, aunque de más duración, no se diferencia fundamentalmente de lo acaecido en Inglaterra. Empezó más temprano y, en parte, aún no ha concluido.

La raíz de la concentración de propiedades en el sur de la península está en la Reconquista. En agradecimiento de sus servicios guerreros, los monarcas distribuyeron muchas tierras, otorgando a los señores la perpetuidad del dominio y la libre disposición. Además se facilitaba la fundación de mayorazgos, que resultó el modo más eficaz de vincular los bienes y favorece extraordinariamente la concentración de propiedades, llevándose el primogénito la totalidad de la hacienda. En el siglo XIV ya era frecuente que los ricos-hombres y caballeros ocupasen por fuerza las tierras de las iglesias y monasterios o usurpasen lugares pertenecientes a ciudades y villas. Hubo más: «Unos señores despoblaban sus lugares, según decían las Cortes (Burgos, 1377), exigiendo de sus vasallos pechos exorbitantes y nuevos, a que no tenían derecho...»<sup>14</sup>

No debe sorprender, pues, el gran número de vagos que ya corrían por el reino en aquella época. «Ortiz indagó cuántas clases existían de vagabundos en la península y encontró 40, designados por otros tantos nombres específicos, consagrados en la lengua española. Una ordenanza del rey don Pedro mandó a los Comunes, en 1351, dieran trabajo a los mendigos, prescribiendo contra éstos, si se rehusaban, la pena de azotes. En 1387, una ordenanza real puso los vagabundos a disposición de los ciudadanos, que recibieron el derecho de imponerles un mes de trabajo. En 1400 prescribió la municipalidad de Toledo se cortasen las orejas a los mendigos, y aun se les matase...»<sup>15</sup> ¡Preciosos antecedentes de la Ley de Vagos!

Durante los siglos de estabilización feudal, el proceso de concentración de la propiedad se hizo más lento. Carlos I no privó a la Iglesia de sus señoríos y de la jurisdicción en ellos. Si bien solicitó un breve del Papa, para proceder a la desamortización de una parte de los bienes eclesiásticos, no llegó a aplicarlo. Muchos de estos bienes que habían sido incorporados a la corona por Felipe II, fueron luego restituidos por Felipe III. Pero simultáneamente se dictan una serie de leyes que deben tener como consecuencia el éxo-

---

<sup>14</sup> F. de Cárdenas, Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial en España. Madrid, 1873.

<sup>15</sup> Moreau de Jonnés, *ibídem*.

do de los campesinos. Para proteger la ganadería a costa de la agricultura, se prohíbe roturar las dehesas, se ordena devolver para pastos las que estén roturadas y se prohíbe tomarlas en arrendamiento a quien no tenga ganado.

Sin embargo, en 1768 los terrenos municipales y los bienes de las comunidades religiosas, cofradías, etc., ocupaban todavía una extensión considerable y la riqueza de los municipios hacía innecesarios los impuestos indirectos. Al jornalero le quedaban algunos recursos al margen de su trabajo, hecho incompatible con la producción capitalista, que necesita que el trabajador sea forzado a entregarse íntegramente y sin reserva a quien lo explote.

En su informe sobre la ley agraria, Jovellanos pide la reducción a propiedad particular de las tierras comunales, pero a pesar de la buena voluntad de Carlos III y sus ministros, a pesar de los platónicos decretos de las Cortes de Cádiz, esta fase tan importante en la separación entre el trabajador y la tierra no llega a realizarse hasta 1855. Entonces las leyes de desamortización (que corresponden a los «Bills of inclosure») ponen en estado de venta todos estos bienes, que, naturalmente, fueron a parar a manos de los grandes terratenientes. El proceso de acumulación se prosigue lentamente a través del siglo XIX. No falta tampoco el «claring of estates»; según dice el mismo Unamuno, los terratenientes expulsaban poblaciones enteras, destruyendo las casas, para transformar el país en una sola tierra de arriendo y despoblar sistemáticamente el campo español. «En agosto de 1902, la aldea de Campocerrado, en la provincia de Salamanca, tenía 265 habitantes; pertenecía a los Santa-Coloma. Desde tiempos inmemoriales, los habitantes disfrutaban de la posesión de las tierras, que los padres transmitían a sus hijos y por las que pagaban regularmente sus censos. Fueron vendidas estas tierras y el nuevo propietario quiso elevar los censos... Ante la protesta de los campesinos, los despidió y mandó desalojarlos por la Guardia Civil.»<sup>16</sup>

Hoy, unas diez mil familias poseen cerca de la mitad del territorio catastrado de España. En la región extremeña, los grandes propietarios se llevan el 60 % de la riqueza total en la provincia de Badajoz, el 57 % en Cáceres y el 49,76 % en Salamanca. En las tres provincias, 3.867 terratenientes reúnen 69.685.306 pesetas, mientras 159.355 pequeños propietarios no poseen más que 23.849.847 pesetas. El terrateniente puede contar con 18.000 pesetas anuales por término medio, mientras al pequeño propietario le quedan 150 pesetas. Las fincas de más de 250 hectáreas ocupan en la provincia de Ávila el 27 % de la superficie, el 42 % en Cáceres, el 46 % en Granada, el 53 % en Ciudad Real, el 50% en Sevilla y el 58 % en Cádiz. En la provincia de Sevilla, los grandes terratenientes son el 5% de los propietarios y reúnen el 72% de la riqueza total.<sup>17</sup> Existen propietarios de 15, de 20 y hasta de 40.000 hectáreas. En las provincias latifundistas, la población vive alejada de la tierra por no tener acceso a ella, lo que trae como consecuencia la extensión de los términos municipales (Córdoba tiene 120.642 hectáreas; Cáceres, 176.849) y las enormes distancias entre las poblaciones; se puede caminar 20 y hasta 50 kilómetros sin encontrar una aldea. En las fincas, los caseríos para obreros son muy deficientes. El obrero vive en los pueblos, a gran distancia de las fincas, donde el ganado ha sustituido al hombre.

---

<sup>16</sup> Angel Marvaud, *La question sociale en Espagne*. París, 1910.

<sup>17</sup> Pascual Carrión, *Los latifundios en España*. Madrid, 1932.

Sin embargo, este movimiento de concentración de la propiedad territorial y la consiguiente creación de fuertes núcleos de expropiados hambrientos, futuros proletarios, se halla lejos de ser uniforme en toda España. Aún actualmente subsisten 1.646.974 hectáreas de bienes comunales y en el norte de la península se han podido salvar a través de los siglos, sin demasiadas modificaciones, formas y usos de la más remota Edad Media. Como ejemplo de estas supervivencias feudales se puede citar el sistema caótico de forros y subforros y la excesiva división y subdivisión del suelo en Galicia, que también es tierra de elección del caciquismo.

Si en Inglaterra los campesinos fueron despojados de sus tierras, sus hijos o nietos, congregados en las ciudades por la naciente industria, no tardaron en hacerse proletarios. En España, tres siglos de desgobierno habían acabado con gran parte de la industria. Los campesinos, que la concentración de la propiedad territorial lanzó a la miseria, hubieron de estancarse y formar durante largo tiempo una población flotante improductiva. Lo muestran las cifras dadas por Madoz para el año 1803 y el gran número de vagabundos, mendigos, contrabandistas, bandidos y frailes que al principio del siglo pasado hacían de España el país pintoresco, encanto de los literatos del romanticismo francés. Sobre una cifra total de dos millones de trabajadores, apenas 300.000 son obreros ocupados en las manufacturas, etcétera. Aun en 1860 no son más que 150.000 los obreros industriales, 26.000 los mineros y 600.000 los artesanos, contra 2.390.000 trabajadores del campo. (Zancada.)

Hasta la época actual, el desarrollo industrial no ha sido suficiente para atraer a estas masas; lo prueba el paro endémico de las provincias latifundistas, el hambre ya secular en las aldeas y las cifras de emigración. Según Bernis, al iniciarse la última guerra mundial, la población activa no formaba más que el 39,1 % de la población total, mientras que en los otros países europeos la proporción era del 42,7 al 51,5 %. Las personas dedicadas al comercio y a la circulación (índice seguro del desarrollo de las fuerzas productivas) sumaban el 4,2 % de la población activa, contra 7,4 en Italia, 17,3 en Holanda y 23 en Inglaterra.

La potencia económica fue el principal sostén de la burguesía en su lucha contra la aristocracia. Gracias al desarrollo del comercio, la burguesía pudo superar la estrecha producción artesana de los gremios y fundar la manufactura, embrión de la gran industria moderna. Como representantes de esta fuerza económica, suma de poderosos intereses sociales, los burgueses lograron influir en las decisiones del poder estatal y hacerlo suyo más tarde. Los reinados de Federico II en Prusia, José II en Austria y, en general, el llamado «despotismo ilustrado» del siglo XVIII marcan el momento en que la monarquía absoluta se ve forzada a transigir con la joven fuerza burguesa.

A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, la economía española estaba en plena decadencia; el pueblo español sumido en la ignorancia. Así se explica que Carlos III y sus ministros, educados en la escuela francesa, queriendo con su ensayo de despotismo ilustrado imitar a gobiernos de otros países europeos en situación muy diferente, no hayan dejado huella duradera. Las revoluciones no se hacen desde arriba ni por medio de leyes; las leyes no sirven sino para sancionar hechos. El pesado edificio constitucional de las Cortes de Cádiz estaba construido sobre arena; bastó la presencia y el soplo del auténtico payaso alumbrado por la gracia divina para hacerlo polvo. Ya lo dijo Lasalle; aun la mejor y más democrática de las constituciones no es más que una hoja de

papel que el menor viento se lleva cuando no hay en la calle quien la implante y la defienda con los puños. Para que viva una constitución no bastan de ningún modo los discursos de los abogados. Un pueblo de católicos y apostólicos analfabetos pedía las cadenas, y el rey payaso no vio ningún inconveniente en dárselas. Pero el siglo XIX se parecía poco al XVI; no era ya fácil cerrar las puertas y ventanas a los capitales e ideas extranjeros. Además, empezaba a manifestarse algo como una «opinión mundial». Había que suavizar los métodos, porque en el siglo de los ferrocarriles la broma de seguir quemando herejes hubiera resultado un tanto pesada, cuando en la vecina Francia los obreros empezaban a levantar barricadas. Los desdichados monarcas tuvieron que renunciar a sus deportes favoritos; el último hereje fue quemado en Valencia en el año 1826 (cien años antes de cruzar Lindberg el océano), y en 1834 la Inquisición quedó definitivamente abolida. Al mismo tiempo se disuelven los gremios medievales; en 1837 se acaba (por lo menos sobre el papel) con los tributos o prestaciones “que denotan señorío o vasallaje”, y Mendizábal decreta la secularización de los bienes del clero, pero Su Santidad amenaza con las huestes carlistas y los concordatos posteriores hacen imposible la aplicación del decreto.

No es que la monarquía cambiara de parecer, pues apenas había variado un poco sus métodos de gobierno. En el siglo XIX ya no era posible oponerse abiertamente al desarrollo capitalista. Se reproducían las mismas tendencias que en el pasado, pero con un empuje cada vez mayor; la resistencia hubiera sido inútil y contraproducente; había que salvar los intereses, no perder el control y tratar de encauzar las nuevas fuerzas por donde menos daño hicieran al régimen establecido. Hasta 1868, la monarquía no pasa de ensayos tímidos encaminados en este sentido. Aunque sin el lujo espectacular de las hogueras, sigue aplicando la táctica de antaño, en pugna demasiado abierta con los nuevos intereses que se van creando. He aquí la causa principal de la inestabilidad política, del gran número de revueltas, pronunciamientos y guerras civiles que, finalmente, dan al traste con la misma monarquía.

Cataluña, donde se habían salvado importantes restos de actividad industrial y comercial, fue la primera en rehacerse. Antes que en otras partes se produjo la suficiente acumulación de capital para suplantar la pequeña producción por la producción en mayor escala, con aplicación de maquinaria. Ya en 1841 la industria algodonera representa un capital de 424 millones y da ocupación a 102.000 obreros. Tanto la Cataluña burguesa como la proletaria van a ser la pesadilla del Gobierno de Madrid, que teme la «hidra separatista», expresión del descontento creciente. La política real sigue en su afán tradicional de poner trabas al progreso industrial. En el real arancel de 1841 se impone a la maquinaria importada un derecho cuatro veces inferior al asignado a las primeras materias, lo que constituye un obstáculo fundamental para el establecimiento de esta industria y la principal razón de su actual retraso. La supresión decretada en 1849 del derecho diferencial de bandera condena al fracaso todos los ensayos de crear una marina mercante. Simultáneamente empiezan a penetrar los primeros capitales extranjeros, que, claro está, deben gozar de un trato de favor y se emplean en proporción creciente, por ejemplo, en la construcción de ferrocarriles, llevada a cabo con notorio desacierto y en un ambiente de arbitrariedad y corrupción raras veces superado. Al mismo tiempo se fundan los primeros establecimientos de crédito y cajas de ahorro. Los bancos de San Fernando y de Isabel II, que en 1874 se fundirán en el Banco de España, en 1844 suman solamente una circulación fiduciaria de 17,5 millones de pesetas. Entre atropellos del

poder feudal nace por fin el niño bastardo que es el capitalismo español, ya tan raquítico como ha de permanecer hasta su no lejana muerte.

Dada la falta de centralización y la desagregación de las demás fuerzas sociales, resultado de los siglos de política entorpecedora, no quedan en la España del siglo pasado más que dos fuerzas organizadas: la Iglesia y el Ejército. El ejército español no se parece en nada a otros ejércitos. No es instrumento del Estado, que dispone de él y a cuyas decisiones se somete sin vacilar. Ni mucho menos. Forma una categoría aparte, un organismo casi autónomo que tiene su propio criterio y sus propios fines. El Ejército de la monarquía española es el ejemplo típico de una institución feudal que, olvidada, ha llegado a un alto extremo de degeneración. Para la guerra, naturalmente, es inservible. ¡Ni pensarlo! Ahí están las pruebas contundentes de Ayacucho, Cavite, Barranco del Lobo, Annual, etc. La guerra de la Independencia no la ganaron los generales, por muchos galones que llevasen en sus uniformes, sino los guerrilleros, el pueblo armado, que es cosa muy distinta. La guerra escasamente entraba en las atribuciones del ejército feudal; el robo, en cambio, tenía un sitio de honor. El Ejército se componía principalmente de oficiales; a cada oficial se le daban por añadidura los necesarios figurantes, algunos soldados cuidadosamente escogidos entre los más analfabetos del reino. El continente americano formaba un enorme cacicato que ofrecía al Ejército amplias ocasiones para practicar el robo en todas sus formas, desde la más primitiva hasta la más burocrática (como luego en Marruecos). Perdidos aquellos virreinos, no quedaba ya mucho del antiguo imperio colonial, y los militares tuvieron que permanecer en la Península en paro forzoso. Vieron con disgusto la actuación de la camarilla imperante, querían su parte en el botín y, único medio para lograrlo, se pronunciaron. He aquí un ejemplo clásico de aquella “revolución política” tan querida por los ilustres teóricos del partido socialista. Si al principio estos movimientos no fueron más que luchas puramente personales entre diversos sectores de la clase dominante para lograr puestos mejor retribuidos, a medida que va avanzando el siglo toman un cariz más abiertamente social. Las revueltas puramente palaciegas y camarillescas, reproducción curiosa de las luchas feudales de la Edad Media, ya no eran compatibles con el incremento de los intereses sociales y con la formación de una “conciencia” en el país. Los militares sublevados tratan de conquistar la opinión prometiendo reformas y libertades. Los Espartero, O’Donell, Prim, etc., triunfan fingiéndose liberales, pero cuantas reformas se hubieran intentado, forzosamente hubiesen tenido que tropezar con la enemistad de la monarquía, siempre inclinada a las soluciones más reaccionarias. La incompatibilidad de grandes sectores del país con la vieja monarquía se hacía cada día más manifiesta.

Aumentaba el malestar periférico en Ultramar, Cataluña y Vascongadas. El carlismo, que tenía fuerte arraigo precisamente en las dos últimas provincias, dista mucho de ser un movimiento exclusivamente reaccionario y clerical; participaban en él bastantes elementos de rebeldía burguesa, que lo consideraban como un pretexto para librarse de la desastrosa tutela del poder central. Finalmente, dada la imposibilidad de mantener la monarquía en su forma presente, el general Prim, en su último pronunciamiento, no tuvo más remedio que expulsar a Isabel II.

En el curso del siglo XIX, la revolución democrática había madurado en España. Cuando por fin se produjo el estallido de 1868, el pueblo español se encontraba en condiciones casi tan favorables como Francia en 1789. La fuerza económica de la burguesía

había adquirido el suficiente volumen para poder imponerse en medio del desconcierto y la descomposición de las clases feudales. El proletariado apenas empezaba a despertar; en su mayoría aún no había adquirido la conciencia de su personalidad propia, sino que caminaba a la zaga del liberalismo burgués y éste tenía su retaguardia protegida. Pero los Pi y Margall y Salmerón no tuvieron la inteligencia ni el valor de Robespierre o de Marat, que, a pesar de lo que afirmó el historiador reaccionario Taine, escondían debajo de su aparatosa oratoria demosteniana un profundo espíritu realista y una clara visión de las necesidades políticas. La revolución francesa dejó al Estado monárquico-feudal completamente destruido. Acabó con los privilegios de la Iglesia, no se detuvo ante la propiedad, modificó profundamente el régimen territorial y llegó hasta el aniquilamiento físico de los representantes de la aristocracia; por fin, armó al pueblo para defender las conquistas de la revolución.

En las alturas olímpicas desde donde los jefes de la revolución española contemplan la vida prevalece la oratoria pura. La revolución se hará parlamentariamente, en Cortes Constituyentes y en medio de los discursos de abogados, o no se hará. No se hizo. Fue otro intento vano de emprender una revolución desde arriba por medio de leyes, cuando la ley no tiene otra misión que la de registrar el hecho producido en la calle. El divorcio entre los jefes y la masa traicionada era patente desde el primer momento. Los campesinos tenían un concepto mucho más justo de lo que debía ser la revolución; empezaban a incautarse de las tierras, pero de repente se encontraron frente a los fusiles del Ejército monárquico, que ahora lo era de la República. En nombre de esa República y por medio de los mismos fusiles fue ahogado en sangre el movimiento cantonalista y cuanto había de verdadera «república» en España. Después todo volvió a estar tranquilo; no quedaban más que unas cuantas leyes votadas por las Cortes que no habían sido puestas en vigor; no fue difícil derogarlas. El hijo del «pollo real» y de la segunda Isabel, llamado por su Ejército, cuya autoridad había sido tan eficazmente mantenida y aumentada por los gobiernos republicanos, pudo sentarse en el trono de los reyes inquisidores.

He aquí el juicio terminante de Joaquín Costa, uno de los pocos revolucionarios democráticos que ha tenido España:

*«Llegó septiembre de 1868; ocurrió el alzamiento del día 29, tan soñado; proclamóse la soberanía nacional; y en medio del mayor entusiasmo, una Constitución democrática fue promulgada. Pues lo mismo que si no hubieseis promulgado nada. Se habló de obstáculos tradicionales, y el trono del monarca fue derribado; pero el verdadero obstáculo tradicional, el trono del cacique, quedó incólume, y todo aquel aparato teatral, manifiesto de Cádiz, juntas revolucionarias, destronamiento de la reina, Constitución democrática, soberanía nacional, no pasó de la categoría de pirotecnia: la graduamos de revolución y no fue más sino un simulacro de revolución... Sentíamos la opresión, tocábamos sus frutos en las oficinas, en los tribunales, en las corporaciones, en los colegios electorales, en las cárceles, pero no atinábamos con la causa, limitándonos a extrañarnos de que las cosas siguieran lo mismo después que la libertad se había hecho carne por las Constituyentes en los grandes días, como decíamos, de la revolución: ahí estaba cabalmente el error: las cosas seguían como antes porque la libertad se había hecho papel, sí, pero no se había hecho carne.»*<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Joaquín Costa, *ibídem*.

La reacción tuvo en Cánovas un talento de estadista muy superior a todo cuanto podían oponerle las corrientes adversarias. El artífice de la nueva restauración vio claramente que no se podía seguir gobernando con los mismos métodos y en la forma de antes de 1868. Aunque fracasada, la revolución había mostrado que la estructura social de España había cambiado en los últimos lustros; al lado de las fuerzas tradicionales había surgido algo nuevo que hubiera sido temerario ignorar. La monarquía española no se modificó profundamente como la monarquía inglesa después de la revolución «gloriosa»; seguía como antes, estrechamente unida al feudalismo, y defendía con el mismo ensañamiento los intereses de la aristocracia territorial y los del clero; en el fondo de su alma suspiraba por la Santa Inquisición, pero no era ya el momento de tales placeres, había que modernizar los procedimientos. A esto estuvo encaminada la labor de Cánovas. Tapó la boca a la burguesía liberal ofreciéndole una Constitución casi democrática de auténtico estilo inglés, con un Parlamento, donde hasta los oradores republicanos, cada día más fosilizados, podían agitar a su gusto los truenos de papel de su elocuencia. Así se desviaban útilmente las corrientes de oposición y las instituciones no corrían ningún peligro. Desde el Ministerio de la Puerta del Sol se hacían elecciones químicamente puras, concediendo a las oposiciones la dosis oportuna para el mantenimiento de las apariencias. A estos fines se disponía de mayorías de recambio tituladas «conservadores» y «liberales», respectivamente, para dar mayor solidez a la ficción de una segunda Inglaterra. Detrás de la fachada británica, el «despotismo oriental», el Estado feudal en su antiguo esplendor. En las provincias, el cacique de pueblo es el amo de las vidas y haciendas de sus súbditos. Su autoridad se halla más bien fortalecida que templada por la del cacique mayor en Madrid. El cacique tiene el poder místico que sin duda arranca de la gracia divina de imponer o no imponer multas, de cobrar o no cobrar los impuestos y, en general, de tolerar o no tolerar «irregularidades». Un comercio o una industria no se establecen sin que él lo consienta.

Pero el capitalismo no puede cumplir con su misión histórica de marcar una nueva etapa en la dominación de la naturaleza por el hombre, aumentando las fuerzas productivas, ni puede crear la industria que la clase obrera recogerá de entre sus manos, sino a condición de estar protegido contra la arbitrariedad feudal. Ninguna clase social ha podido llevar a cabo su misión sin tomar el poder y constituir su propio Estado. El capitalismo no se realiza plenamente sino en el Estado burgués. La gran industria creada sobre el terreno de un Estado feudal, probablemente resulta tan artificial y falsa como los grupos escolares de los socialdemócratas vieneses. La producción capitalista casi siempre se desarrolla en la democracia burguesa donde un régimen de liberalismo económico no pone trabas a la libre competencia. Las nuevas formas autoritarias y totalitarias del Estado burgués, como órgano del capital de los trusts y monopolios, marcan ya la decadencia del capitalismo: su enfermedad senil.

No es de sorprender que el capitalismo español, crecido sobre la base del Estado feudalcaciquil, no haya solucionado ni los problemas más fundamentales de la producción. Casi todo está por hacer. Mientras la burguesía italiana, falta por completo de carbón, hierro y algodón, ha podido crear las grandes industrias de Milán, Turín, etc., el famoso triángulo del Norte que mantiene al resto del país en una dependencia semicolonial, en España, gran parte de las riquezas naturales siguen sin aprovechar.

Antes de la guerra apenas se explotaba la sexta parte de las minas. Las compañías de

ferrocarriles, que en su mayoría se encontraban en manos del capital francés, se negaban a toda disminución de las tarifas, extraordinariamente altas, que les permitían realizar enormes beneficios. Por esto se hizo imposible el aprovechamiento de las minas de hierro o carbón que se encontrasen a más de 150 kilómetros de la costa. El carbón de los Estados Unidos pudo venderse en Barcelona a un precio inferior al coste del carbón de Belmez trasladado a Sevilla. El Estado no hizo nada para nacionalizar las minas; por el contrario, mantuvo el régimen anárquico de las concesiones, cobrando por ellas anualmente el «canon de superficie». Cuando se descubrieron en Cataluña los yacimientos de potasa, el monopolio alemán de la potasa solicitó una concesión de algunos millares de hectáreas. Si no hubiese sido por la protesta de los catalanes y el consiguiente miedo de la hidra separatista, el Gobierno de S. M. no hubiera vacilado en dar satisfacción al imperialismo alemán y condenar a esterilidad perpetua esta fuente de riqueza, para que el monopolio alemán pudiera mantener los precios de las sales de Stassfurt.

El Gobierno sueco, por ejemplo, prohibió la exportación de minerales ricos, para fomentar la industria metalúrgica. En España, esta industria se establece con gran retraso en las últimas décadas del siglo pasado. Sobre una producción anual de 9,45 millones de toneladas de mineral de hierro se exportan 8,4 millones, es decir, el 90 %. España tiene que importar de Inglaterra maquinaria fabricada con sus propias materias primas. En 1883, «The Times» pudo decir: «Por fin hemos hallado lo que nos convenía. El Ministerio que hoy rige los destinos de España es el Gabinete más afecto a los intereses británicos que en Europa tenemos, incluso los de Portugal y de Turquía... El triunfo obtenido por nuestra diplomacia es inmenso y nuestros industriales tocarán muy pronto los resultados lisonjeros del nuevo orden de cosas establecido en España...».<sup>19</sup>

La contribución industrial y del comercio de hecho equivalía a una contribución sobre el ejercicio de la industria. De otra parte, el favoritismo practicado por la Administración creaba arbitrariamente los más injustificados privilegios por medio de sus exenciones tributarias, sus aplazamientos y reducciones de impuestos y por las tarifas especiales de ferrocarriles. Los terratenientes y los imperialistas extranjeros se daban la mano para impedir toda libertad económica. Había unidad de criterio en el Banco Hipotecario, tributario de la «Banque de Paris et des Pays Bas», y el de España, gran cacicato de los terratenientes usureros, dueño absoluto, con sus 2.600 millones de pesetas, del mercado de dinero. Los terratenientes españoles son fundamentalmente hostiles al incremento de la industria. Quieren mantener su preponderancia, el estado caciquil que tan eficazmente les ampara, y temen la concentración en los centros industriales de un proletariado consciente, como el que pueden observar en el extranjero. Las masas de campesinos hambrientos constituyen un peligro menor. «El instinto de las revueltas campesinas, con sus repentinas y cortas sacudidas, no basta para sublevar un mundo», dijo Jaurès. Para ellas disponen de la Guardia Civil, cuerpo muy disciplinado que se desplaza con gran rapidez, y, en un país de comunicaciones tan deficientes, llega a aislar y sofocar con relativa facilidad los diferentes focos de rebeldía.

Hasta la guerra mundial, los terratenientes logran contener el desarrollo industrial. Incluso en la parte más capitalista de España, en Cataluña, la industria algodonera, falta de créditos, se halla atomizada. Gracias a la insuficiente concentración de capitales, abundan las fábricas pequeñas, que por término medio no poseen más de seis mil a ocho mil

---

<sup>19</sup> Manuel Pugés, *Cómo triunfó el proteccionismo ex España*.

husos, mientras en Francia son corrientes las de cuarenta mil a cincuenta mil husos.

Los latifundistas ingleses, que después de la revolución gloriosa asumieron el poder junto con la burguesía industrial, se señalaron por su perfecta identificación con el capitalismo; su espíritu de lucro y la audacia de sus empresas impulsaron, a su vez, el desarrollo capitalista. También en España nace con los latifundios un tipo nuevo de propiedad concentrada que se presta mejor a la aplicación de los métodos modernos de producción en gran escala, empleo de abonos, maquinaria, etc. Pero los terratenientes españoles siguen viviendo en pleno siglo xv. Las enseñanzas de la producción capitalista no han logrado perturbar la calma proverbial de sus católicas conciencias. He aquí aquella «burguesía agraria de torpes irredimibles» que Diego Ruiz caracteriza en su *Rabassa morta*. Las rentas que los latifundistas obtienen de sus tierras aunque se exploten muy extensivamente, les permiten vivir bastante mejor que el resto de los mortales; no sienten ningún estímulo de ganar más; para ello sería preciso reflexionar, calcular, arriesgar capitales; y no hay nada que repugne tanto a los feudales degenerados. El espíritu de empresa que la burguesía mostró en sus momentos de esplendor, les falta por completo: todo lo sacrifican a su ideal de pereza integral, a su indolencia de bajás orientales, con los que tienen más de un punto común. En las provincias latifundistas se siguen aplicando los métodos de cultivo de la época feudal. El riego es netamente insuficiente, y no se aprovechan las posibilidades para mejorarlo. Faltan abonos y estiércol. Prevalecen los sistemas antediluvianos de cultivo al tercio, al cuarto y aun al quinto. El rendimiento, naturalmente, es muy bajo. España produce por término medio 8,9 quintales métricos de trigo por hectárea;<sup>20</sup> Francia, 11,8; Italia, 11,9; Polonia, 13,6, y Dinamarca, 27,6. La cría de ganado resulta tan poco intensiva como el cultivo; los cerdos se crían en montañera, mientras en los demás países se usa hoy la estabulación, que, además de mejorar considerablemente la calidad del ganado, permite un aprovechamiento más racional del estiércol. En las grandes fincas se cuenta una oveja por cada sesenta y cuatro áreas. Desde el siglo XVIII, la degeneración de las lanas españolas es uno de los más graves obstáculos con que lucha la industria lanera de Cataluña. Refiere Costa cómo cierto latifundista extremeño, alarmado por la deficiencia del ganado lanar, adquirió en Inglaterra algunos ejemplares de ovejas. Pero estas ovejas británicas, cuidadosamente seleccionadas, producto del esfuerzo secular de los ganaderos ingleses, al pisar tierra española no pudieron soportar el clima; les pasó lo que a la británica Constitución de 1876: murieron o degeneraron completamente. Estos inocentes aunque aristocráticos corderos, con su martirio y muerte, dieron a los señoritos españoles una lección menos severa, pero tan explícita, como la de *la Invencible*. Quedó patente su incapacidad no sólo de organizar la producción, sino de resolver ninguno de sus problemas fundamentales. Un economista burgués podía escribir:

*«Todo aquello que es excelente alcanza prácticamente valor para las economías extrañas o yace latente por falta entre nosotros de empresa... Lo que es pobre y rinde poco, absorbe a la mayoría de la nación con un aprovechamiento extensivo que asegura a una minoría una vida espléndida y mantiene en la pobreza a la gran masa. O la disipación de los recursos brillantes (minerales), o el penoso cultivo de una tierra cada vez más esquilhada. Aquello para los extranjeros, con o sin una colaboración que parece complicidad por parte de una minoría de felices españoles; esto para la holgura, tam-*

---

<sup>20</sup> Durante el quinquenio 1926-30.

*bién de una minoría de españoles, con el agotamiento y la resignación de la mayoría del país.»<sup>21</sup>*

Siguiendo la ley natural del capitalismo, los imperialistas se aprovechan de la situación creada por la inhibición del capitalismo español. Durante los años que preceden a la guerra, casi todas las industrias nuevas nacen con una fuerte preponderancia de capitales extranjeros. La industria de aparatos eléctricos no es sino una sucursal de las grandes compañías alemanas. La hidroeléctrica que suministra la corriente a la industria textil catalana se halla de hecho monopolizada por los capitales ingleses. En 1914, los 365 millones de pesetas de la «Canadiense» constituyen el 80 % de los capitales empleados en la industria hidroeléctrica de la región. En 1913 fueron creados en el extranjero los siguientes valores españoles:

Nuevas sociedades con domicilio en Francia, francos oro.....	18,010.000
Nuevas sociedades con domicilio en Bélgica, francos oro.....	10,800.000
Nuevas sociedades con domicilio en Inglaterra, francos oro.....	39,944.440
Capitales extranjeros cubriendo nuevas emisiones en España, francos oro	149,327.000
<i>Suman más de 210 millones de francos los capitales extranjeros colocados en España durante un solo año.<sup>22</sup>....</i>	

Los patriotas del Banco de España pueden estar satisfechos: a la par que dificultaron el desarrollo de la industria nacional e impidieron el establecimiento de bancos de crédito, han facilitado la conquista de España a los grupos extranjeros y entregado su comercio a la banca internacional.

Sin duda, la industria española hubiera seguido vegetando entre los constantes atropellos del Estado caciquil, y, bajo la benévola vigilancia de las grandes potencias, España, lentamente y sin que nadie se enterase, se hubiera convertido en otra república sudamericana más, si no hubiese estallado la guerra mundial.

Por el hecho de la neutralidad española, la producción tan raquífica de este país, que nunca había llegado a jugar un papel en el mercado universal, de repente cobra una importancia singular. Los países beligerantes están dispuestos a pagar cualquier precio por sus primeras materias y manufacturas; los capitalistas españoles explotan su neutralidad lo mejor que pueden y realizan pingües ganancias. Cada soldado que cae destrozado por los obuses, en los campos de la Champagne, hace subir las rentas de estos pacíficos ciudadanos, y cada día que se prolonga la carnicería es para ellos una fuente de regocijo, una bendición del cielo. En el clima artificial creado por la tormenta, el modesto capitalismo español pudo crecer y desenvolverse, tal una planta tropical, con una rapidez asombrosa.

Las importaciones en 1910 sumaron 994,53 millones; en 1916 fueron sólo de 912,97 millones, mientras las exportaciones se elevaron, de 965,84 millones en 1910, a 1.364,55 millones en 1916. Contra 2.701.913 toneladas de carbón en 1913, en 1918 no se importaron más que 465.447 toneladas. Al mismo tiempo, el valor total de la produc-

<sup>21</sup> Francisco Bernis, Fomento de las exportaciones. Barcelona, 1920.

ción minerometalúrgica sube, de 454 millones de pesetas en 1910, a 626 millones en 1915 y 1.387 millones en 1918. Aumentan las exportaciones de la industria algodonera, de 50 millones de pesetas en 1913, a 155 millones en 1915. El incremento de las fuerzas productivas es formidable. Hasta los terratenientes, muy tímidamente, empiezan a emplear maquinaria y abonos. Se nota un ligero aumento en la producción de cereales y aceite, crece el número de cabezas de ganado. La proporción de analfabetos, que en 1910 se acercaba al 60 % de la población, baja al 43 % en 1920. Como consecuencia del fortalecimiento inesperado del capitalismo español, el capital imperialista pierde una parte de su antigua preponderancia. Muchas empresas extranjeras, como los ferrocarriles, la Sociedad de Aguas de Barcelona, etc., vienen a parar a manos de consorcios españoles.

Pero este aumento de los intereses sociales debía traer consecuencias graves para el orden establecido. La guerra mundial es la raíz de la revolución española. El edificio levantado por Cánovas empezó a derrumbarse. En pocos meses, la burguesía española, de criada despreciada, se había convertido en una señora gorda y respetable, enriquecida con los despojos de la matanza. Con voz imperiosa pedía un sitio de honor en la mesa de los señores. El empuje económico había dado por tierra con el laborioso equilibrio del Estado caciquil. Pero en 1917 hacía tiempo ya que había pasado la época heroica de la burguesía. Las jornadas de Petersburgo acabaron de demostrarle lo ineludible de su próxima muerte y la llenaron de espanto. Al mismo tiempo sube a la escena política de España un personaje nuevo, ya fuerte a pesar de su juventud, resuelto a vencer y eliminar las fuerzas unidas de sus adversarios: el proletariado.

---

<sup>22</sup> Pedro Corominas, *La Banque et la monnaie*. Barcelona, 1914.

## II. EL PROLETARIADO ESPAÑOL

### 3. REPÚBLICA SIN TRABAJADORES

*Sólo en España se mueven aún hombres y partidos para modificar la superestructura, el caparazón social. ¿En qué se diferencian los partidos republicanos de los monárquicos? En poco o nada. Sus programas ante este punto concreto de la propiedad son aproximadamente los mismos.*

*Una república capitalista no se distingue substancialmente de una monarquía capitalista...*

*El socialismo español se ha republicanizado en vez de haber socializado el republicanismo.*

*(Luis Araquistain, España en el crisol. Barcelona, 1920)*

*...Un guardia civil asesinado y seis huelguistas muertos.*

(La prensa)

El proletariado industrial, clase social consciente de su misión histórica y que tiene fines concretos y un rumbo definido, no es producto de un día ni de una generación. Se ha fraguado en un sinnúmero de luchas cruentas. Han sido precisas una serie de enseñanzas, la experiencia amarga de miserias, errores y traiciones que aún no han terminado.

Los campesinos, a los que la acumulación originaria despoja de sus tierras, no son más que campesinos, y como tales reaccionan ante los hechos.

El individuo aislado vivía con su familia de la pequeña explotación agrícola. Con grandes esfuerzos y con medios rudimentarios luchaba contra la naturaleza hostil para dominarla y arrancarle su subsistencia. Pero de repente se ve separado de su pedazo de tierra, sus ovejas, su arado; expulsado de su hogar; lanzado a la miseria. La ciudad lo acoge agobiado por el hambre. Para no morir, él, su mujer, sus hijos, desde la más tierna edad, trabajan en la fábrica de catorce a dieciséis horas diarias. Es la época «heroica» del capitalismo; el patrono quiere acelerar la acumulación -«enrichissez-vous», hay que enriquecerse-; al trabajador hay que explotarlo hasta la última gota de sangre. ¿El obrero resiste, cae enfermo, se muere? Pobrecito; ahí están miles y miles esperando colocación. El individuo aislado no entiende. Había luchado contra la naturaleza, la había dominado, y ahora se encuentra, a su vez, esclavizado por la máquina, como un mero instrumento sin voluntad propia. El individuo aislado de antes ya no es más que un número en

el océano de los números; el pequeño productor independiente se ha convertido en un átomo sin importancia de la gran producción.

La psicología de un individuo o de una clase no cambia con su situación económica, necesita tiempo para adaptarse, a veces tarda generaciones enteras. El individuo aislado, transformado en número, guarda el recuerdo de una vida mejor, no ha olvidado su pedazo de tierra, su vaca, sus gallinas, el arado que le hacía vivir. Sueña con volver al campo, a la naturaleza, a la paz de su hogar; busca una salida a su situación y no la encuentra. ¿Quién es el culpable de su miseria? ¿El patrono don Fulano? ¿Las máquinas? El individuo coloca una bomba en el coche de don Fulano, quema la fábrica, destroza las máquinas, pero todo sigue igual. El individuo entonces medita sobre su desgracia y sus fracasos y lentamente se va formando una idea nueva en su conciencia: por fin se da cuenta de que ya no es un individuo aislado, sino un número entre millones de números. ¡Un número sólo no tiene fuerza, pero todos unidos son capaces de conmover al mundo! Nuestro individuo ve que las máquinas no son malas: depende de quien las emplea. El número abandona sus sueños reaccionarios de pequeña producción individual y reconoce que la técnica es un factor decisivo del progreso humano. Ve también que don Fulano no es sólo el culpable, sino la totalidad de los fulanos: para acabar con la miseria hay que ir clase contra clase, ésta es la verdad.

La educación política del proletariado, la transformación gradual del antiguo campesino y artesano individualista en proletario consciente, que siente la lucha de clases y la lleva a su verdadero terreno, no es la obra de un día. Todo proletariado ha tenido que pasar por un período de equivocaciones, por fases de terrorismo individual y utopías reaccionarias. Tras el terrorismo de los «luddistas» y el utopismo «oweniano» vino el gran movimiento cartista que instruyó al proletariado inglés en la lucha política. El socialismo científico de Marx recoge su experiencia. En los demás países europeos, los continuadores de Marx, grandes figuras del socialismo internacional, antes de la bancarrota de 1914, cumplieron con esa misión educativa. A pesar de sus errores, el proletariado debe mucho a los Guesde, Jaurès, Bebel, etc., en cuya escuela se formaron los militantes que después de la grandiosa lección de la revolución rusa lograron rescatar el auténtico socialismo marxista del naufragio social-patriota y social-reformista.

El proletariado español, en su mayoría, es de formación reciente. Sorprende a primera vista el fuerte arraigo de las ideas anarquistas entre los obreros de Cataluña, cuando en el resto de Europa el movimiento obrero salió hace tiempo de esta fase «individualista», que es, en cierto modo, la «enfermedad infantil» del proletariado. Hay quien trata de explicar el anarquismo de los obreros catalanes y campesinos andaluces por el «temperamento de los pueblos mediterráneos» o el tradicional «individualismo de la raza latina», argumentos muy del gusto del señor Madariaga y restantes diplomáticos ginebrinos y que, por tanto, no nos satisfacen. La coincidencia entre los braceros andaluces y obreros catalanes no es fortuita. La industria catalana es la más antigua de España, pero a raíz de las crisis industriales que precedieron a la guerra mundial, una gran parte de los obreros catalanes tuvieron que emigrar y fueron luego sustituidos por trabajadores recién llegados de otras provincias, y, por último, la guerra, con su gran aumento de la producción, trajo a la ciudad nuevos contingentes de aspirantes a proletarios, gente naturalmente inclinada a agruparse en derredor de la retórica anarquista. El Partido Socialista brillaba por su ausencia, y con ella contribuyó eficazmente a que los aventureros

pequeño-burgueses, anarquistas o republicanos, se apoderasen de la masa trabajadora catalana. Se ha querido ver en Pablo Iglesias un Jules Guesde, un Bebel español, y se ha impuesto a la masa socialista un verdadero culto de este personaje tan patriarcal. Pero si en la vieja socialdemocracia obraban inteligencias como Liebknecht o Luxemburg, si en ella se completó y se enriqueció la doctrina creada por Marx, en España aun las obras más fundamentales del marxismo quedan desconocidas y sin traducir al castellano hasta en los últimos años. El socialismo llega al obrero militante español filtrado y alterado por Pablo Iglesias. Ante la realidad de la lucha de clases, el militante socialista se encuentra tan desamparado y falto de la indispensable preparación teórica como el anarquista. Incapaz de comprender la realidad española, Iglesias quiso aplicar a España la táctica ultrarreformista y «apolítica» de las «trade-unions», baluarte de la aristocracia obrera inglesa. La burguesía británica, que además de su propio pueblo explotaba las dos terceras partes del mundo, se pudo ofrecer el lujo de dar un de trato de favor a una parte de sus obreros y de permitirles un nivel de vida superior. La burguesía española, en cambio, tributaria del imperialismo, no se sostenía sino gracias a la explotación integral de los trabajadores, pagándoles jornales de hambre. Con innegable acierto, Pablo Iglesias se dedicó a templar el ardor revolucionario de las masas (por ejemplo, en Bilbao), a predicarles la transigencia, impidiendo llevar la lucha al terreno político, que es donde únicamente se puede vencer. Aun en los momentos más decisivos, el mal llamado «socialismo» español sigue caminando a la zaga del republicanismo más fosilizado. He aquí cómo enjuicia su actuación Luis Araquistain, escritor socialista», que no estaba en 1920 completamente desprovisto de sentido común:

«...los señalados como revolucionarios por los conservadores han sido gentes que sólo aspiraban a la evolución pacífica de la sociedad... El partido político más radical es el socialista. Durante muchos años ha sido también el partido más transigente, más reformista, más evolutivo. Llegó incluso a transigir con la monarquía, hasta el fusilamiento de Ferrer... Los partidos llamados revolucionarios de nombre han sido los más anti-rrevolucionarios de hecho.»<sup>23</sup>

Pero este benemérito socialismo logra el aplauso de sus adversarios:

«...si don Alfonso lo hubiese querido, el gran Partido Socialista, que el admirable Pablo Iglesias creó apolítico, hubiese prestado su apoyo a la monarquía, ya que, integrado por hombres de buena fe y casi conservadores (aunque parezca paradójica), si creyeran los dirigentes realizable su programa dentro de las cosas estatuidas, hubiesen colaborado con el Gobierno y la revolución hubiérase retrasado indefinidamente.»<sup>24</sup>

No es de extrañar que lo mejor del proletariado revolucionario siguiese fuera de las filas socialistas. Durante la guerra mundial, los socialistas, sin tener el menor pretexto para ello, se vuelven patrioterros y germanófobos. Creían sinceramente que la victoria de los imperialismos aliados sería el triunfo de la «democracia»; se hicieron cómplices de los consorcios ingleses y de los «demócratas» de la «Banque de Paris» que oprimían al pueblo español. Frente a los manejos de las Juntas militares pidieron al pueblo que defendiera la «supremacía del poder civil». En 1917, en plena situación revolucionaria, Pablo Iglesias hace una declaración de «republicanismo» y habla de «remediar las des-

---

<sup>23</sup> España en el crisol.

<sup>24</sup> Marqués de Vinent, El primer Estado.

dichas de nuestra patria» y de «enaltecer el nombre de España».

El socialismo caricaturesco de Pablo Iglesias y de sus herederos no cumple con su misión fundamental, que es la de instruir a las masas y darles una orientación política. La ignorancia de los dirigentes es total; no ha sido posible formar los cuadros de militantes instruidos, la vanguardia que necesita todo movimiento obrero. La educación política de las masas trabajadoras está por hacer. Así se explican, en parte, las dificultades que tuvo que vencer el comunismo en los primeros momentos; no encontró, como en otros países, cuadros ya existentes de buenos militantes revolucionarios, formados en la escuela marxista. Hasta en los últimos años se desconocía la dialéctica. Son obreros y estudiantes de la joven generación los que desde el advenimiento de la república muestran el mayor entusiasmo en el estudio de estas cuestiones.

La guerra mundial estimuló extraordinariamente la producción española, favoreció la industrialización y fue la causa de cambios profundos en la economía del país. El Estado monárquico al servicio de los terratenientes y basado en el caciquismo de esencia feudal, tal lo había restablecido Cánovas, no correspondía a la nueva estructura económica. La monarquía no podía ya aplicar sus métodos de gobierno tradicionales, ofreciendo a la burguesía un Parlamento fantasma para luego imperar sin consultarlo. En 1917 empieza a sobrevivirse. Para protestar contra uno de los clásicos atropellos del rey, la suspensión de las llamadas «garantías constitucionales», Cambó organiza en Barcelona una Asamblea sumamente patética y lacrimógena en la que participan todos los representantes de la burguesía, desde Melquíades Álvarez hasta Lerroux y Pablo Iglesias. Pero si la burguesía ha logrado aumentar su fuerza, también el proletariado se halla fortalecido por el desarrollo industrial. Pocas semanas después de la emocionante revuelta parlamentaria de frac y chistera estalla una huelga general revolucionaria. Es la primera vez que el proletariado se manifiesta independientemente, y, a pesar de su dirección deficiente, este primer movimiento tiene ya una pujanza extraordinaria. Desde 1917, el proletariado es un factor decisivo de la política española. No tiene aún una orientación política bien definida, está en busca de su verdadera personalidad, pero, a pesar de lo impreciso de la amenaza, la burguesía, por primera vez, se da cuenta del peligro que constituye para ella; ya no se atreve, como antes, a jugar con esta amenaza y a agitarla como un espantapájaros en sus pleitos con la monarquía. El espectro de la revolución proletaria es la pesadilla de todos los gobiernos. Frente a él, los terratenientes y la burguesía industrial se juntan en un espontáneo frente ímico. Desde 1917, la burguesía teme la revolución tanto y más que los terratenientes. A pesar de la nueva correlación de las fuerzas sociales a consecuencia de la guerra, la burguesía no se atreve a dar el golpe decisivo contra el Estado feudal; y la monarquía, herida de muerte, se muestra transigente. En 1918, Francisco Cambó, representante de la burguesía industrial catalana y revoltoso de 1917, es ministro de Fomento de Su Majestad. Martínez Anido, encargado por la monarquía y los matones feudales de ahogar en sangre el movimiento obrero de Cataluña, es vitoreado por toda la burguesía catalana.

En 1923, con motivo de la imponente lista de víctimas que causa la clásica corrupción e incapacidad del Ejército feudal, se inicia un formidable movimiento de protesta. La presión de la opinión popular pidiendo el castigo de los responsables se hace irresistible. La burguesía se encuentra en un dilema. También ella se opone a la actuación de las camarillas militares en Marruecos, al inútil derroche de sus dineros. Pero detrás de la protesta

popular brota la revolución social: la monarquía sigue siendo el mal menor. Por fin, el rey la saca del mal trance; su persona de confianza lo es también de la burguesía. El golpe de Estado de Primo de Rivera se organiza en Barcelona con el júbilo de los industriales catalanes. Alucinados por los éxitos de Mussolini, ven en la persona del militarote su mesías, el salvador, que con fuerte puño arrancará la peste revolucionaria y los librerá de esta pesadilla. Creen que desde el gobierno defenderá sus intereses, restringiendo los abusos y poniendo fin a la corrupción. También el rey considera al caudillo como su tabla de salvación, su último recurso para seguir tirando. Pero la burguesía se vio defraudada. Primo de Rivera se mostró incapaz de organizar el «fascismo» anhelado. Es difícil crear desde el poder, y especialmente desde un poder tan desacreditado como el monárquico, un movimiento de masas que necesita para alimentarse, gestos demagógicos y consignas más o menos revolucionarias. El dictador sólo consigue armar somatenes de ventripotentes ciudadanos de orden, que son el contrario de las impetuosas juventudes mussolinianas. Su gobierno es un gobierno semifeudal muy parecido a otros que lo precedieron, aunque tal vez el más pintoresco de todos. Como la Pompadour y Luis XV, en los últimos tiempos de la monarquía francesa, el dictador y sus satélites pueden exclamar: «Aprés nous le déluge!».

Es la época de la estabilización capitalista, de la «prosperity»; los créditos extranjeros afluyen; la vida parece bella; hay que llenarse los bolsillos. Empieza una juerga monumental: exposiciones universales, corridas, bailes y aguardiente, todo para que el pueblo no se entere. Pero los espectáculos no pueden durar siempre. Si bien los generales las quisieran largas, las borracheras necesariamente tienen que terminar. En octubre de 1929 se produce el primer crac en la Bolsa de Valores de Nueva York y principia la gran crisis capitalista. Los créditos se agotan, la peseta se halla amenazada, ha terminado la fiesta. La burguesía española despierta con un dolor de cabeza feroz y una lista no menos imponente de deudas que pagar. La experiencia dictatorial ha sido contraproducente; los obreros empiezan a agitarse otra vez, sube la ola de las huelgas. La autoridad del rey ha sufrido el golpe final; la actuación del gobierno dictatorial no ha satisfecho a nadie; el descontento se extiende a los mismos terratenientes, que se creen insuficientemente protegidos porque la crisis les impide vender sus productos. Don Alfonso se ve forzado a despedir al militarote, pero ya no basta este sacrificio; el odio popular, que crece al par que la miseria, se dirige contra todo lo existente, quiere acabar con todas las instituciones del Estado opresor. Hasta los terratenientes empiezan a darse cuenta del peligro que constituye para ellos la permanencia del rey. Hay que sacrificar la monarquía para evitar la revolución. Es preciso organizar otra fiesta espectacular, otro simulacro de revolución, dando como pasto la familia de los Borbones a las iras populares, para poder conservar la plusvalía. No falta más que ponerse de acuerdo sobre el momento del traspaso de servicios: éste se debe operar sin el menor choque, sin derramar una gota de sangre, en el mayor silencio y a espaldas del pueblo, porque una sola chispa bastaría para encender las llamas revolucionarias. Los hombres que, gracias a la inexperiencia de las masas, logran ponerse frente al movimiento popular para formar luego el Gobierno provisional, ofrecen al capital las necesarias garantías. Hay entre ellos representantes de los terratenientes, de la gran burguesía y tres socialistas de los más seguros, cuya presencia en el Comité constituye la mejor garantía de tranquilidad. La «inoportuna» sublevación de Jaca pone de manifiesto su voluntad pacífica. Gracias a su acertada intervención, no se declara la huelga general y la insurrección no se genera-

liza; los terratenientes pueden dormir tranquilos; una vez más, se ha salvado el orden establecido. Conmovidos por tanta disciplina, los terratenientes otorgan su confianza a los jefes antidinásticos. Por fin se ofrece una ocasión de sustituir el poder real y de realizar la anhelada «revolución sin sangre». En las elecciones del 12 de abril de 1931, los caciques son casi unánimes en atribuir el triunfo a los republicanos. Todavía faltan por arreglar algunas modalidades para que el Gobierno provisional pueda posesionarse de sus cargos. Se acuerda dar la debida protección al rey y a la familia real en su viaje hacia la frontera... por si acaso al pueblo se le ocurre tomar en serio eso de la «revolución». Por fin, con el permiso del general Sanjurjo, jefe de la Guardia Civil, se puede proclamar la República, ir a la sustitución del rey por el presidente. Ésta fue la «revolución política» de los teóricos del Partido Socialista. Su héroe principal: el general Sanjurjo, jefe de la Benemérita. Los sublevados de Jaca, tan concienciadamente sacrificados por los partidarios de la «revolución sin sangre», tenían un concepto muy diferente de lo que iba a ser la república y no merecen homenajes ni monumentos de piedra.

Gracias sobre todo a la colaboración prestada por los socialistas, la operación se había podido realizar sin incidentes. Desterrado el rey, España quedó convertida en una república; y «república» fue la palabra mágica para atraerse las simpatías, para calmar las iras populares, que se habían objetivado en la persona del monarca. La inexperiencia política de las masas les impidió recordar que también Venezuela y Portugal son repúblicas y tan republicanas como España. Para desviar momentáneamente la atención de los más exaltados bastaban unos cuantos espectáculos bien arreglados, como la quema de conventos sin su contenido, la «mise en scène» de las hogueras, que tanto había servido a la monarquía en siglos anteriores.

En 1873, la burguesía hubiera podido realizar la revolución democrática, pero en 1931, teniendo a sus espaldas un proletariado cada día más combativo, esta posibilidad se había evaporado para siempre. La revolución francesa se hizo en una época de industrialización incompleta. Mientras no existía aún el antagonismo profundo entre burgueses y proletarios, ambos pudieron unirse en el tercer estado para acabar con el poder feudal. La revolución francesa destruye las mismas bases del Estado monárquico feudal, expropiando los inmensos bienes de la aristocracia y del clero (he aquí la verdadera «separación» de la Iglesia y el Estado) y enviando al cadalso a sus más destacados representantes. Fue una revolución contra la propiedad y no una «revolución sin sangre». Una parte de las tierras expropiadas fueron a parar a manos de los grandes burgueses de la ciudad, nuevo tipo de terratenientes capitalistas; las restantes fueron repartidas entre los campesinos pobres, que constituyeron una clase muy numerosa de pequeños propietarios. A primera vista, este reparto de tierras parece un desacierto; el desarrollo capitalista exige mayor concentración de propiedades, y la revolución, fraccionando el suelo, realizó una política reaccionaria. Y en el fondo lo era el ideario de Robespierre soñando con hacer de Francia una nación de pequeños propietarios. Sin embargo, esta división de la propiedad territorial resultó luego una de las mejores garantías para el mantenimiento de la dominación burguesa. Las masas de campesinos pequeños propietarios fueron el principal sostén de la burguesía en sus luchas contra el proletariado de las ciudades. Sin el reparto de tierras realizado por la revolución democrática no hubiera sido posible aplastar, un siglo después, la Comuna de París, y la revolución proletaria hubiera triunfado en el año 1871.

Pero 1931 español no se parece en nada a 1789 francés. La burguesía española sustituye el poder real para evitar la revolución proletaria que se avecina. Quiere ganar tiempo distraendo a las masas populares con discursos fantasmagóricos sobre la «República» y por medio de promesas democráticas que no puede cumplir. Los más sinceros (y más inconscientes) entre los republicanos españoles soñaron con instaurar una república burguesa conservadora, estilo Tercera República francesa en tiempos de su mayor brillantez. Olvidaron que esta república conservadora fue el producto de una revolución sangrienta que aniquiló hasta los últimos restos de la dominación feudal. En la «República conservadora», el régimen descansa principalmente sobre la masa de los campesinos conservadores, a quienes la revolución democrática dio la propiedad del suelo.

La burguesía española lucha desesperadamente contra un proletariado cada día más consciente y más agresivo, que aspira abiertamente a expropiarla, a desposeerla de todas las riquezas. Iniciar la revolución democrática en estas circunstancias equivaldría a desencadenar la revolución proletaria. La burguesía sabe demasiado bien por qué renunció a tomar el poder por la fuerza, por qué no secundó la sublevación de Jaca, sino esperó hasta que los mismos señores feudales la llamasen a gobernar. Ella no puede permitirse el lujo de ir contra la propiedad. Iniciada la expropiación de la aristocracia territorial, las masas populares acabarían despojando a la misma burguesía. Los terratenientes se opondrían al reparto de sus tierras, y para vencer su resistencia sería necesario armar al pueblo; pero el pueblo armado, a la larga, tampoco respetaría a los magnates del Banco Urquijo o de Altos Hornos, por muy «demócratas» que fueran. Precisamente para evitar esto se hizo la «revolución política» del 14 de abril. La llamada «reforma agraria» no puede constituir una solución. La expropiación de tierras con indemnización, transforma al gran propietario en gran acreedor y el servicio de esta deuda recae, a su vez, íntegramente sobre las espaldas del campesino, que no gana absolutamente nada en este juego de disfraces. Aun así, no se han expropiado más de 42.000 hectáreas sobre las 573.000 que detenta la grandeza.

Otro punto de la revolución democrática es la separación de la Iglesia y el Estado, es decir, la destrucción del poder del clero como clase dominante. Tampoco se realiza solamente por las virtudes mágicas de un artículo impreso en el papel de una constitución. Mientras la Iglesia pueda disponer de sus riquezas, todas las leyes del mundo no serán más que letra muerta. En el transcurso de los siglos, el clero español ha podido acumular grandes riquezas. En tiempos de Carlos I, ya había constituido un importante capital de usura; lo demuestran los numerosos empréstitos que la Iglesia otorgaba a los reyes. Hoy interviene en casi todas las actividades económicas. El clero posee granjas agrícolas, fábricas, transportes, bancos, etc. ¿Separación de la Iglesia, expropiación de sus bienes?... Bien. Pero ¿cómo distinguir lo que es de Dios y lo que es del César? ¿Dónde ha de terminar la expropiación? Burguesía y clero, curas y ciudadanos laicos están fuertemente compenetrados: no se sustituirá la enseñanza religiosa. Gracias sobre todo a las aptitudes comerciales y usureras de una parte de sus miembros, esta potencia medieval sigue ejerciendo el terror sobre las conciencias.

La burguesía española no puede realizar la revolución democrática sin suicidarse. No puede crear la clase de pequeños propietarios cultivadores, indispensable para el establecimiento de la democracia burguesa, en un país principalmente agrícola como España. Los señores feudales dieron a la burguesía una participación mayor en el Gobierno

que correspondía a los cambios operados durante la guerra; la dieron cuando el frente único burgués-terrateniente ya era un hecho consumado y después de convencerse de que la burguesía no intentaría implantar la democracia. La República fue la más oportuna prolongación de monarquía. El Estado republicano se sirve de los mismos órganos que la monarquía: el caciquismo y la Guardia Civil. Desde el Ministerio de la Puerta del Sol se hacen elecciones químicamente puras, como el tiempos de Cánovas y de Maura. Los caciques, en vez de ser conservadores o liberales, se llaman agrarios, radicales o republicanos de izquierda.

Azaña no se distingue fundamentalmente de Lerroux o de Gil Robles si no fuera por su mejor oratoria. Todos tienen la misión de capear el temporal y la cumplen con mayor o menor destreza. Gracias a la colaboración de tres ministros socialistas, los Gobiernos Azaña contaban con una base más amplia en el país. Pero a la larga era imposible ocultar el desengaño de las masas populares, que esperaban otra cosa de la «República». A pesar de la colaboración socialista, las huelgas y revueltas campesinas se hacen más frecuentes. Ante la radicalización de las masas, los dirigentes socialistas están en peligro de perder su clientela. Burgueses y terratenientes temen que ya no les sirva este instrumento y creen haber ganado bastante tiempo para intentar nuevas soluciones. Los cambios políticos observados en ciertos países extranjeros les muestran las ventajas de un Gobierno autoritario, que les permitiría afianzar su dominio por algún tiempo. Para ello hace falta un movimiento de masas. Los terratenientes encuentran un pretexto en el laicismo puramente verbal de los gobiernos republicanos, especulan sobre el sentimiento religioso de la gente: «la pobre Iglesia perseguida por el sectarismo laico» es el eje de su propaganda.

*«... los católicos, como tales —dicen—, debemos acatar el régimen, disponernos a invadir el campo adversario y emprender una serie de campañas políticas, hasta ver modificadas las injustas leyes que nos rigen. Levantémonos, pues, como un solo hombre...; hay que conquistar las cumbres, tanto cuanto lo permita la dignidad cristiana. Arrollemos o sorteemos los obstáculos. Hay que ser astutos como las serpientes.»<sup>25</sup>*

Los agentes del capital financiero español y extranjero, agrupados alrededor de Lerroux, colaboran con fervor y organizan las elecciones del 19 de noviembre de 1933, dando una mayoría adecuada a estas «fuerzas nuevas». Pero en este intento de organizar un fascismo tropiezan con las mismas dificultades que en 1923. Los frailes y señoritos no bastan por sí solos para ponerse enfrente de un movimiento de masas. La Familia, la Tradición, la Fe cristiana, el prestigio de la Patria, poco interesan a unas multitudes que, además de su miseria habitual, tienen que soportar todas las consecuencias de la crisis. «Revolución social» es la única consigna capaz de moverlas. La oratoria católica no les puede engañar, aparece como lo que es en realidad: una maniobra más de la reacción feudal. El señoritismo y el clericalismo no han aprendido ni olvidado nada; frente a la realidad política muestran la más soberana incomprensión. Gastar 80.000 pesetas para sacar una procesión en un país donde más de 700.000 trabajadores se mueren de hambre constituye un acto de propaganda contraproducente. El pueblo lo toma por lo que es: una provocación. Durante varios meses y con grandes clamores, la prensa anuncia una concentración de juventudes en El Escorial. Pero a pesar de esta propaganda tan intensa, a pesar de los enormes medios económicos y del apoyo prestado por las autoridades, las

---

<sup>25</sup> J. Tusquets, Orígenes de la Revolución española. Barcelona, 1932.

juventudes siguen ausentes; no acuden más que unos cuantos residuos de los somatenes primorriveristas, mientras la protesta popular se manifiesta arrolladora.

Una vez más, la burguesía se orienta hacia la «izquierda»; ve claramente que aún no puede prescindir del apoyo socialista. Pero en la masa que sigue al Partido Socialista se han operado cambios profundos. Las enseñanzas de tres años de república han sido fructíferas. Al par que las ilusiones de la «revolución política», se ha evaporado la confianza en la falsa democracia de sus protagonistas. Los dirigentes del ala reformista del Partido Socialista, que hablan demasiado abiertamente de volver a colaborar con la burguesía, se hallan aislados y divorciados de lo que fue su base.

En estas circunstancias, ¿resucitará la conjunción republicano-socialista?

No lo desean solamente los burgueses. Pero ya es tarde. Una sola idea domina a las masas, cada día más potente, más precisa. Las soluciones medias no son soluciones. Quienes se opongan, sea cual fuere su nombre y filiación, serán arrollados; los expropiadores serán expropiados.

# EPILOGO

1934-1976

## 4. REVOLUCIÓN Y CONTRARREVOLUCIÓN

*La cuestión de España no se resuelve en España, ni por españoles.*

(Diego Ruiz, *Represión mental en Alemania*. Barcelona, 1933 )

Y los expropiadores fueron expropiados, pero...

A raíz de la crisis económica de 1930-1935 habían madurado en España las condiciones objetivas de una revolución. Para evitarla, o siquiera aplazarla, no bastaban ya las maniobras de los partidos políticos. Las tentativas de la reacción clerical burguesa de afianzar el poder que le habían entregado las elecciones químicamente puras de noviembre de 1933 (obra del «soborno y la coacción», se decía) tropezaron con la resistencia cada vez más organizada de las masas obreras y campesinas. La contraofensiva popular contra los atropellos del Gobierno derechista culminó en las huelgas de octubre de 1934, al establecer los mineros de Asturias el primer poder obrero en la historia de la península ibérica.

La Comuna asturiana sirvió como ejemplo para la revolución española de 1936; sus iniciales, «UHP» (Unión Hermanos Proletarios), fueron el símbolo y lema que adoptaron los combatientes. Lejos de los grandes centros donde se trazaban los rumbos de la política nacional y en ausencia de los principales dirigentes, la sublevación pudo tomar un carácter unitario, olvidando las divergencias que separaban a socialistas, anarcosindicalistas y comunistas. Como ulteriormente en los comités de 1936, esta unidad en la base se realizó también durante la represión, en las cárceles atestadas de presos políticos, entre los jóvenes que por su menor categoría quedamos detenidos en otros locales o galerías que los altos jefes políticos y sindicales, formando nuestro «comité» conjunto, sin fijarnos en las diferencias de ideología.

Pero si los sucesos de 1934, hasta cierto punto, equivalen para la revolución española de 1936 a lo que fueron las jornadas de San Petersburgo de 1905 para la revolución de octubre rusa, tampoco desaprovechó la experiencia el adversario. La represión en Asturias,

metódica y minuciosamente organizada desde Madrid por el general Franco, sirvió como ejemplo a la que se iba a ejercer a raíz de la guerra civil y que, con pocas modificaciones, se ha ido practicando hasta hoy. Vencida, no sin dificultad, la resistencia encarnizada de los mineros asturianos, ayudados por su don de guerrilleros y por un mejor conocimiento de sus montañas que el de los militares de academia, empezó la represión policíaca. Bajo el mando del comandante Doval, de la Guardia Civil, aquélla se llevó a cabo con los refinamientos de un sadismo conforme, por cierto, a una tradición harto antigua en España, pero que ya entonces, en las llamadas «democracias», no se aplicaba más que a los pueblos colonizados. Si los sucesos de 1934 fueron el ensayo general de la revolución y contrarrevolución de 1936, a su vez la guerra civil de 1936-1939, que no tardó en rebasar con mucho el ámbito ibérico, ha sido el ensayo general de la segunda guerra mundial. De Guernica, el camino lleva directamente a Rotterdam y a Coventry.

Desde mediados de 1934, y aún más a raíz de los sucesos de octubre, se puso de manifiesto la incapacidad del Gobierno derechista de organizar desde el poder, ya no el fascismo anhelado, cuanto menos un régimen clerical y autoritario de represión antiobrera, comparable al del canciller Dolfuss en Austria. Aun perdida militarmente, la batalla de los mineros asturianos había sentado un ejemplo y revelado a la clase obrera su propia fuerza, que desconocía. Por otra parte, el componente radical lerrouxista de la mayoría gubernamental, comprometido en una serie de estrepitosos escándalos financieros, quedó totalmente desprestigiado, lo que tuvo por efecto de coartar todavía más la acción del ala católica de Gil Robles. En estas circunstancias, un amplio sector de la misma burguesía se convenció de que aún no podía prescindir del apoyo socialista.

Después de la fácil victoria nazi en Alemania, el cambio de táctica de la Tercera Internacional, que tuvo por resultado la formación de un frente popular antifascista en Francia y España —y más tarde en Chile—, señaló el principio de un nuevo ciclo revolucionario. En España, el Frente Popular, apenas formado, logró una victoria aplastante en las elecciones de febrero de 1936. Esto se debió, desde luego, al dinamismo propio de los movimientos de masa unificadores en una época prerrevolucionaria; el factor decisivo, sin embargo, fue la actitud de los anarcosindicalistas, que, renunciando a su principio de apoliticismo, votaron en masa por el Frente Popular —único medio de obtener la libertad de los 30.000 presos políticos.

El Partido Socialista, con 88 diputados en las Cortes el más fuerte numéricamente, estaba profundamente dividido. En su mayoría, los elementos más jóvenes y dinámicos, aleccionados por los sucesos de 1934, habían perdido sus ilusiones reformistas de 1931. En un país con 700.000 parados, frente al paro endémico en las provincias latifundistas, con sus casi dos millones de campesinos sin tierra, un partido que representaba un sector tan amplio de la clase obrera no podía ya cerrar los ojos ante esa realidad. Su apoyo a la burguesía o a los partidos republicanos, en la medida en que defendían intereses capitalistas, sería, pues, de lo más precario.

En el campo, el conflicto se había agudizado hasta tal punto que los campesinos, cansados de esperar el reparto de tierras prometido desde hacía tantos años, pasaron a ocuparlas, sin aguardar la autorización del Gobierno y el beneplácito del Instituto de Reforma Agraria. Frente a esta movilización de las masas ya no era posible una represión de tipo tradicional, mandando a la Guardia Civil a meterlas en razón, como una vez más se qui-

so hacer en Yeste. En la primavera de 1936 hubo que tolerar la ocupación de los latifundios, sobre todo en Extremadura, donde los campesinos, inspirándose en una tradición de colectivismo agrario muy antigua en España, más que en el ejemplo soviético o la doctrina de los partidos y sindicatos revolucionarios, formaron espontáneamente sus cooperativas agrícolas, los «koljoses», de los que tanto se maravillaron Ilya Ehrenburg y los demás periodistas soviéticos que los visitaron.

El Gobierno de Frente Popular, compuesto exclusivamente de ministros republicanos y que sobrevivía gracias al apoyo socialista, no tuvo finalmente más remedio que legalizar esta violación del derecho de propiedad, renunciando a defender los intereses de los terratenientes. Pero, tras abolirla en el campo, ¿cómo proteger la propiedad privada en la industria y la banca?

No cabía la menor duda, por otra parte, que, de no resistir a este atropello, se vendría abajo la civilización cristiana, consubstancial, como es sabido, con el derecho de propiedad. Había que actuar sin demora, desencadenando una contrarrevolución preventiva para evitar ese desastre. Caso que fuera necesario, no había que vacilar en morir matando —a la española—. Los conspiradores militares, que desde el paso de Gil Robles por el Ministerio de la Guerra se estaban preparando a vista de todos, aún no habían logrado reunir en sus manos todos los hilos que hacía falta manejar para asegurarles el triunfo, cuando se vieron así forzados de lanzarse un tanto prematuramente a esta contrarrevolución, cuyo efecto inmediato fue justamente provocar la revolución que se trataba de impedir. Sorprendida en plena gestación, ésta tuvo que improvisarlo todo en pocas horas.

El 19 de julio de 1936, los españoles se despertaron sin ejército, sin administración ni justicia —sin Estado—. Los órganos de poder por los que obreros y campesinos pudieran sustituir esas instituciones aún no existían: hubo que crearlos sobre la marcha.

Frente al ejército mandado por los generales sublevados, eran pocos los que tenían experiencia militar y sabían manejar las armas. Por cierto, los jóvenes socialistas de Madrid, en sus excursiones dominicales a la Sierra solían llevar en la mochila, para sus ejercicios de tiro, armas de pequeño calibre, bien engrasadas dentro de la tortilla; pero ¿qué posibilidad tenía el pueblo desarmado, que en el mejor de los casos llevaba escopetas de caza y pistolas automáticas, de enfrentarse con los militares de las guarniciones importantes, por mal pertrechadas que estuvieran?

En Madrid y Barcelona fue decisivo el apoyo de la Guardia de Asalto, creada para defender las instituciones republicanas, que, si bien hasta entonces se había señalado sobre todo en la represión antiobrera, con una parte de la Guardia Civil se mantuvo leal al Gobierno constitucional, proporcionando a los milicianos obreros el encuadramiento indispensable para tomar por asalto los cuarteles sublevados (una suerte que no tuvo en septiembre de 1973 el Gobierno chileno de Unidad Popular). En Bilbao, Santander, Valencia, Alicante, Málaga y otros centros, la insurrección no llegó a materializarse o quedó desbaratada desde el principio. Tras su victoria, al parecer decisiva, el pueblo en armas ocupaba más de los dos tercios del territorio nacional, con las tres cuartas partes de su población, sus centros más importantes y la casi totalidad de su producción industrial y riqueza. Los insurgentes no pudieron mantenerse más que en las zonas agrícolas del oeste de Andalucía, en Galicia y en las montañas y mesetas de Navarra, Castilla la Vieja

y Aragón. Dada la imposibilidad de que rehicieran rápidamente sus pérdidas en hombres y material, su dispersión final no podía tardar más que unos días. La sublevación militar había fracasado.

Para colmar el vacío que había dejado la defección repentina del Estado burgués, el pueblo no tardó en organizar, comenzando por la base, su propio poder, múltiple y diverso, según la región, provincia o población. Lo ejercían una variedad infinita de comités, forma típicamente ibérica de aquellos «soviets», cuya formación los partidos comunistas del occidente venían reclamando hacía tiempo. Cada comité actuaba según criterios propios, conforme a la tendencia de la organización predominante en el lugar: CNT, Juventudes Socialistas, Partido Comunista, etcétera. En Aragón, los anarcosindicalistas en pocos días llevaron a cabo la colectivización a marchas forzadas. En Gijón, según pudimos comprobar en agosto de 1936, la CNT había suprimido el dinero, pagándose todo con vales emitidos por los diversos comités. La producción y los servicios no quedaron paralizados por eso: el sistema pudo funcionar a costa de una (¡ya!) pletórica burocracia. En Bilbao, donde subsistían importantes sectores de economía capitalista y aún se veían por las calles curas de sotana, los nacionalistas vascos lograron establecer una administración al parecer sumamente eficaz, de tipo más bien británico. En Barcelona por fin, centro de experiencias más o menos audaces de colectivización, los anarcosindicalistas por una parte, la Esquerra Catalana y el PSUC por otra, evitaban enfrentarse abiertamente, observando una tregua precaria. En todas partes, las instalaciones industriales se habían convertido en fábricas de armas, donde se trabajaba febrilmente.

A fines de julio de 1936, después de haber derrotado a los generales rebeldes, la España republicana aparecía, pues, como un inmenso mosaico de comités, con un Gobierno nominal al frente. Desvanecido el Estado que ese Gobierno debía regir, la autoridad efectiva estribaba exclusivamente en los comités.

La multiplicidad de esos comités, el fraccionamiento extremo de las fuerzas en acción, conforme al particularismo tradicional, que a su vez se debe al escaso desarrollo de los intereses sociales y a la insuficiencia de las comunicaciones en un pasado todavía reciente, no constituían, ni mucho menos, condiciones ideales para realizar un esfuerzo de guerra prolongado y sistemático. Cabía esperar, sin embargo, que andando el tiempo se lograría decantar esa mezcla, acabando por encontrar un denominador común y crear un órgano dirigente aceptado por todos: la forma genuinamente ibérica del poder obrero.

El anarcosindicalismo, al que se adherían algunos de los elementos más dinámicos del proletariado industrial y rural, no obstante su gran experiencia de las luchas obreras, no tenía una visión histórica muy clara de la misión que incumbe a la clase trabajadora en la sociedad futura, una vez derrotada la burguesía. La victoria de julio de 1936 cogió de sorpresa a los sindicalistas. ¿Qué hacer con ella? Se puede lamentar esta falta de preparación; ante los hechos, sin embargo, muchos no tardaron en llegar por vía empírica a las conclusiones oportunas que no les había señalado la teoría. En una revolución, el empirismo no deja de ser preferible al dogmatismo, que a menudo lleva a seguir ejemplos inaplicables. Sin el empirismo de Lenin, sostenido, esto sí, por un armazón teórico sin falla, la revolución rusa nunca hubiera triunfado. A la postre, los anarquistas, adaptándose sin excesiva dificultad a las exigencias de una situación imprevista, hasta delegaron a cuatro militantes para representarlos en el Gobierno de Largo Caballero, en contradicción absoluta con su doctrina.

Por aquellos días, las columnas de milicianos, organizadas apresuradamente por los diversos partidos y sindicatos, guerreaban un poco como en la época feudal cada una por su cuenta. A la larga, sin embargo, no dejarían de adquirir la experiencia que aún les faltaba y la cohesión necesaria para acabar con un enemigo ya duramente golpeado que no disponía de recursos comparables ni de un verdadero apoyo popular en la mayoría de las provincias que ocupaba. Indudablemente, la revolución iba a triunfar de una contrarrevolución iniciada con tan malos auspicios. Pero...

En Europa y en 1936, una época en que el antagonismo entre imperialismos rivales se hacía cada vez más agudo, la situación de España no podía ya evolucionar prescindiendo del contexto internacional, en un vacío. El fascismo alemán y el italiano, sedientos de conquistas, que se aplicaban a romper el cerco en que los mantenían los imperialismos más antiguos del oeste, privilegiados también por su situación geográfica, no podían desaprovechar la oportunidad que les brindaba el conflicto español. Comenzaron, ya en los últimos días de julio de 1936, por prestar un apoyo logístico a los generales sublevados, transportando de Marruecos a Andalucía las tropas aguerridas y bien pertrechadas del ejército de África, para lo cual se valieron, por primera vez en la Historia, de un puente aéreo. Tras salvar así a los generales de un fin inmediato sin gloria, no iban a tardar mucho en intervenir más directamente, mandando armas, aviones y por fin fuerzas expedicionarias, compuestas en su mayoría de tropas escogidas.

Al precisarse la amenaza de esa intervención fascista, se esperaba en Madrid, un tanto ingenuamente por cierto, que el nuevo Gobierno de frente popular francés, presidido por León Blum, no vacilaría en hacer suya la causa del pueblo español. En aquel momento, una ayuda francesa aún podía ser decisiva para restablecer el equilibrio en España y evitar que Francia tuviera que luchar en un tercer frente contra las potencias fascistas en la guerra que se estaba avecinando. León Blum no lo ignoraba, pero para actuar tenía que esperar la luz verde de Londres, una señal que el aliado inglés no estaba dispuesto a darle, pues, al contrario, advirtió que, de provocarse así un ataque alemán, Gran Bretaña no intervendría. Aun sabiendo, como todo francés, que ningún Gobierno británico, por conservador que fuese, podía tolerar la presencia del ejército prusiano en Calais y que frente a este peligro resistiría, sacrificando hasta el último soldado francés, León Blum no se atrevió a hacer caso omiso de esta advertencia. Es que, aun después de ser recibidos en la buena sociedad, como premio de su patriotismo en la primera guerra mundial, en la cual, con poquísimas excepciones, prestaron su apoyo más decidido a la burguesía imperialista, los socialdemócratas todavía no se sentían totalmente seguros: cada uno seguía llevando su sambenito, pues tenía que hacerse perdonar el hecho de ser hijo de obreros o, lo que a veces es peor, de judíos. El mismo Blum era incapaz de desobedecer la orden de Inglaterra, tal como probablemente se atrevería a hacerlo un gobernante burgués —no necesariamente un Clémenceau o un De Gaulle— que, sin tener simpatía por la revolución española, fuera simplemente nacionalista.

Sin haber llegado a un acuerdo formal con los generales sublevados, el imperialismo inglés poseía intereses demasiado importantes en España para poder congraciarse con los revolucionarios.

Los nazis, siendo anticomunistas, al fin y al cabo no eran tan malos como se decía: en Inglaterra, más de un dirigente conservador se complacía en la compañía de Ribbentrop. Había que apaciguar a los fascistas y, en la medida de lo posible, no contrariarlos, esti-

mulando el «Drang nach Osten»<sup>26</sup> de los alemanes, a fin de que atacaran a la Unión Soviética. Así las democracias asistirían como meros espectadores al duelo entre Hitler y Stalin, dejando que ellos se despedazaran mutuamente.

La Internacional de los poseedores de medios de producción, que va afianzando cada día más su poder, para constituir finalmente las grandes empresas multinacionales (o «transnacionales»), a menudo obra más rápida y resueltamente que la Internacional de los que aspiran a desposeerlos. Para dar afuera una impresión favorable, el Gobierno de Madrid se comprometió a respetar el capital extranjero, pero en un país en que toda la economía, desde las grandes fincas hasta las fábricas y bancos, ya estaba virtualmente socializada, ¿cómo distinguir entre las inversiones de los capitalistas nacionales —de las órdenes religiosas, por ejemplo— y las del capital financiero anglofrancoamericano, tan intrincadamente entrelazadas? Las afirmaciones de un Gobierno, cuya autoridad era más bien limitada, no engañaron a nadie. Los Rothschild pueden ser buenos «demócratas», pero sería absurdo esperar que sacrifiquen sus intereses en aras de la Libertad.

Las altas esferas de la democracia occidental no tardaron en idear un artefacto para estrangular oportunamente la revolución española: la no intervención en la guerra civil de España, a la que gustosamente se adhirieron los gobiernos fascistas, pues se trataba de una no intervención en sentido único, quedando los alemanes e italianos libres de enviar cuantos aviones, armas y tropas quisieran. En los momentos cruciales, en cambio, la frontera francesa permanecía herméticamente sellada. Así, cuando los milicianos vascos tuvieron que evacuar Irún por falta de municiones, lo que fue la causa inicial de la pérdida de toda la costa cantábrica, los vagones en que se habían enviado armas y municiones desde Cataluña y cuyo tránsito por territorio francés, en virtud de un acuerdo entre los dos países, no se debía impedir, quedaron inmovilizados a pocos metros de la frontera española durante todo el tiempo que duró el combate. Desde la primera trampa —el transporte a la Península del ejército de Marruecos, que había de llegar a las mismas puertas de Madrid— era evidente que los dados estaban cargados; el juego, sin embargo, iba a continuar... hasta la última estocada.

En todo el mundo se organizaron grandes manifestaciones de solidaridad con la revolución española. Los obreros de París, que, ocupando las fábricas, tal como los braceros de Extremadura habían ocupado los latifundios, conquistaron en pocos días más ventajas que en el medio siglo precedente—, si bien sus líderes, Blum y Jouhaux (de la CGT), los seguían muy a regañadientes—, en el gran mitin celebrado en Luna Park clamaban por:

—Des canons pour l'Espagne! Des avions pour l'Espagne!

Pero Blum, mostrando impudicamente el pie hendido del socialdemócrata, les recordó que en aquel mismo momento, en Berlín, otras multitudes también reclamaban cañones y aviones... para los generales facciosos. Al equipararlos a las hordas nazis, el jefe socialista reveló de repente todo su desprecio por los obreros de París, nietos de los de la Comuna, que acababan de llevarlo al poder.

Frente a la alianza tácita de los defensores de la propiedad privada, la revolución española no podía contar —si se exceptúan los gestos de buena voluntad del presidente Cár-

---

<sup>26</sup>Empuje hacia el Este.

denas de México—sino con la ayuda de la Unión Soviética. De hecho, esta ayuda, tanto como a las razones ideológicas y de solidaridad que por fuerza debía tener en cuenta el primer Estado socialista de la Historia, obedecía a los dictados de la «Realpolitik» de Stalin. Para contrarrestar la ofensiva fascista y guardar cierto equilibrio europeo era preciso mantener en vida a la República española. Las armas de toda índole y algunos instructores enviados para demostrar su manejo, que en ningún momento fueron suficientes para lograr la victoria, bastaron, sin embargo, para dar una influencia decisiva al Partido Comunista y engrosar enormemente sus filas, pues todavía quedaba intacto el inmenso crédito que la revolución de octubre valió a la Unión Soviética.

Esto sucedió en un momento particularmente ingrato de la Historia, coincidiendo con los grandes procesos de Moscú y la liquidación de la vieja guardia bolchevique, un fenómeno tan específicamente ruso que en el occidente nadie lograba entenderlo. Los representantes de la URSS en España desaparecieron uno tras otro y llegó a ser peligroso mencionar sus nombres. En todas partes se consideraba imprescindible seguir el ejemplo soviético y descubrir a «traidores» a todo trance, organizando, cuando fuera posible, procesos espectaculares, tal como ulteriormente se iba a conseguir en forma casi perfecta en Checoslovaquia y Hungría.

De todos los países acudieron voluntarios para alistarse en las brigadas internacionales. Desde el punto de vista puramente militar, esas brigadas no llegaron a ser un factor decisivo, salvo tal vez en la batalla de Guadalajara, en marzo de 1937, cuando el flamante «Cuerpo de Tropas Voluntarias» despachado por Mussolini tuvo que enfrentarse con los italianos antifascistas del batallón Garibaldi. El resultado, desastroso para el cuerpo expedicionario fascista, confirmó una vez más la imposibilidad en que se encuentran unos jefes megalómanos e ineptos de llevar al pueblo italiano a la guerra en pro de un imperialismo que le es del todo ajeno, para no decir contrario. Sucedió en Guadalajara lo que ya había pasado en Adua y Caporetto y que volvería a producirse en Albania, frente a los griegos, así como en toda la segunda guerra mundial. Desmoralizados desde el principio, los «voluntarios» huyeron. Muchos se pasaron a las filas del batallón Garibaldi, llevándose armas, coches y camiones y, más de una vez, liquidando a sus propios oficiales que intentaban impedirlo. Comentando los sucesos, Luigi Longo, comisario de las brigadas, escribió:

«No son tropas lo que tenemos enfrente, sino una masa de pobres gentes traídas a España por el engaño y el hambre.»<sup>27</sup>

De gran importancia histórica, por ser la primera derrota del fascismo, la batalla de Guadalajara hizo patente el considerable efecto moral que produjo la presencia de las brigadas internacionales. Profundamente alarmadas, las democracias acabaron por prohibir la salida de voluntarios.

En compensación de una ayuda prestada en condiciones tan adversas, la URSS —y en aquella época la URSS era Stalin— aspiraba a desempeñar un papel dirigente, lo que contribuyó no poco a falsear las perspectivas de la revolución española. Lo mismo que su archienemigo Trotsky, Stalin y sus consejeros juzgaban la situación española de 1936 basándose ante todo en su propia experiencia de 1917, a pesar de ser las analogías más

---

<sup>27</sup> Luigi Longo, *Le Brigate Internazionali in Spagna*, Roma, 1956, pág. 299.

bien tenues. Por lo visto no existen fórmulas universales, fueran ellas rusas, chinas, vietnamitas o cubanas, para hacer la revolución. El mismo Ernesto «Che» Guevara no logró trasplantar la guerrilla de la Sierra Maestra de Cuba al Oriente de Bolivia, bien situado, desde el punto de vista estratégico, en el centro de Sudamérica, pero en un país que ya en 1952 había llevado a cabo una reforma agraria. El aplicar una receta es el mejor medio de perder una revolución.

Puesto que en la Unión Soviética se había eliminado a trotskistas y anarquistas, era indispensable proceder del mismo modo en España. Los anarcosindicalistas, agrupados en la CNT, organización de masas, predominante en muchas regiones, eran un hueso demasiado duro de roer. El POUM, en cambio, partido minoritario de la oposición comunista, arraigado únicamente en Cataluña, constituía un blanco ideal. Se le había pegado el rótulo de «trotskista», aunque el mismo Trotsky, cada vez más obcecado por su odio a Stalin, no se contuvo, en sus homilías, de tratar a los dirigentes del POUM de «traidores» y de «criminales», por el mero hecho de luchar al lado de los comunistas en un Frente Popular antifascista, originalmente ideado por los stalinianos.

En mayo de 1937, cuando finalmente se rompió la precaria tregua observada hasta entonces y los adversarios se enfrentaron en las calles de Barcelona en un violento tiroteo, fue el POUM el que tuvo que pagar el pato, desapareciendo del escenario político.

El desacuerdo se centraba en una disputa un tanto bizantina: la revolución, ¿había que hacerla antes o después de ganar la guerra? En realidad, la revolución ya estaba hecha desde julio de 1936, cuando obreros y campesinos la realizaron, muchas veces a espaldas o por encima de sus dirigentes. Por muy buena voluntad que se tuviera, ya no era posible deshacer totalmente la obra de los comités, descolectivizar la economía, quitar la tierra a los campesinos y restaurar la propiedad privada de los medios de producción en la industria. A lo sumo se podía enderezar un tanto una situación caótica para mejor coordinar la producción, evitando el despilfarro y reduciendo las pérdidas que fueron el resultado forzoso de la acción espontánea, no siempre muy acertada, de los comités. El Gobierno de Negrín, en el que estaban representadas las fuerzas merecedoras de la confianza soviética, si bien logró organizar un ejército disciplinado, no pudo erigir, frente a las democracias, una fachada suficientemente moderada para darles una impresión más favorable, lo que sin duda hubiera agradado a sus patrocinadores en la URSS.

Para la Unión Soviética, anhelosa ante todo de reunir en su mano el mayor número posible de triunfos que le permitiesen hacer frente a la nueva guerra mundial en una posición de fuerza, la revolución española no constituía un fin. Dando, en cambio, a las fuerzas republicanas la posibilidad de resistir, la guerra civil, al prolongarse, llegó a ser el medio de ejercer una presión hartamente eficaz. Desde el momento en que la «Realpolitik» de Stalin se enfrentó con la «Machtpolitik»<sup>28</sup> de los fascistas en tierras de España, la «guerra civil» ya no iba a ser española más que de nombre. De país semiindependiente, España se había convertido en un mero peón en el tablero de ajedrez de las grandes potencias, un peón tal como Grecia, al que no se vacilaría en sacrificar, siempre que se pudiera lograr alguna ventaja decisiva —con la sola diferencia de que los griegos nunca tuvieron la ilusión de ser independientes.

---

<sup>28</sup> Política de potencia

Si en cada país la revolución sigue derroteros muy diversos, según el desarrollo de su economía (que determina la importancia relativa de las clases sociales), su tradición de la lucha política, su acervo cultural, etc., el fascismo —que ha sido, en un momento dado de la evolución capitalista, la respuesta que la burguesía monopolista dio a esa revolución, arrojando su máscara democrática— toma, a su vez, las formas más variadas.

Se ha definido al fascismo como un movimiento de masas que, subvencionado por los grandes monopolios capitalistas e integrado esencialmente por pequeños burgueses arruinados en las crisis económicas, se vale de una fraseología revolucionaria bastante vaga para que cada uno —campesinos, pequeños comerciantes y artesanos, jóvenes desempleados, excombatientes de la guerra— pueda interpretarla a su antojo. Las derrotas del proletariado (fracaso de la ocupación de fábricas en Italia, del movimiento espartaquista y de los soviets de Baviera y Turingia en Alemania) crean condiciones favorables al desarrollo del fascismo: la sangre obrera es el mejor abono para acelerar su crecimiento.

Después de entregarles el poder los jefes de Estado —el rey de Italia y el mariscal Von Hindenburg—, los fascistas procedieron a pagar sus deudas a los señores de los monopolios, cumpliendo su cometido, que es la destrucción total de las organizaciones obreras, sindicales y políticas, mediante la acción violenta de un terrorismo legalizado y en nombre de un líder carismático, a la vez jefe absoluto y símbolo del movimiento. Una vez que los trabajadores quedaron así en la imposibilidad de defender sus intereses, los patronos pudieron sin temor rebajar su salario —aprovechándose al máximo de la competencia entre los trabajadores, que se hace más aguda en épocas de crisis y desempleo— y, gracias al mecanismo terrorista, establecido y perfeccionado por el fascismo, mantener el salario en el nivel más bajo hasta mucho tiempo después de haber terminado la crisis económica. Mientras tanto, al aumentar así en proporciones considerables la plusvalía producida por el trabajo humano, los que daban empleo pudieron realizar un superbeneficio.

Comenzando por el mismo Mussolini, los fascistas, inventores de la nueva forma más perfecta de reacción, nunca dejaron de manifestar su desprecio por los meros «reaccionarios». Por cierto, comparado con la reacción de antaño, que no podía ser totalitaria, el fascismo aparece como el motor diesel o la máquina eléctrica frente a la vieja máquina de vapor. Los tecnócratas de hoy, que en la nueva fase del capitalismo caracterizada por las aplicaciones de la electrónica y de la energía nuclear, representan a las grandes empresas multinacionales, más poderosas que los mismos Estados, por lo general consideran el fascismo como un sistema un tanto anticuado, aunque no tienen inconveniente en mandar aplicar sus métodos en los países semidesarrollados, señaladamente en América latina. Debido al nuevo aumento de la productividad del trabajo, ha sido posible mejorar considerablemente el nivel de vida de los asalariados en los países industrializados; por lo tanto, los gestores de los monopolios aún no creen necesario que se establezca otro régimen de fuerza. Sin embargo, al entrar a su vez en decadencia el capitalismo modernizado, ¿quién sabe si, terminada la era de los llamados «milagros económicos», ante las crisis más y más frecuentes y profundas, con su secuela de paro forzoso y de protesta popular, no se tratará de resucitar al fascismo, dándole las nuevas formas de una tiranía totalmente dehumanizada, mucho más precisa, eficaz e invulnerable en su rigor científi-

co, servida por un ingente ejército de computadoras?

Se ha dicho que en España el fascismo no llegó a constituir un movimiento de masas. Efectivamente, los generales monárquicos, terratenientes, magnates de la industria y conservadores de toda calaña que lo ansiaban se hallaban, por su misma índole, en la imposibilidad de crearlo. En el momento en que los generales resolvieron hacer su contrarrevolución preventiva, la «Falange» de José Antonio Primo de Rivera, pese al innegable talento de su fundador, cuya oratoria en algunas ocasiones logró seducir a más de un hombre de izquierdas, no pasaba de ser un movimiento todavía embrionario.

Con José Antonio detenido y luego fusilado por los republicanos, muertos José Calvo Sotelo y el general Sanjurjo -seguidos al poco tiempo por el general Mola-, fue promovido a jefe supremo, conforme al «Führerprinzip», el sustituto más plausible: el general Franco. Durante cerca de cuarenta años, éste se iba a mostrar más hábil, más astuto y sobre todo mucho más cauto de lo que probablemente hubieran resultado aquellos candidatos preferidos desde el principio y considerados, cada uno de ellos, como indispensables.

Ante la inconveniencia de asentar un poder en las solas bayonetas, lo más urgente era unir los diversos sectores —falangistas, carlistas, monárquicos— que, fuera de las fuerzas armadas, apoyaban la sublevación. El aglutinante para lograr esta operación lo suministraron los mismos republicanos. Teniendo en cuenta el papel que a la Iglesia le cupo desempeñar a lo largo de los siglos, el odio visceral que ella inspiraba tanto a los obreros organizados como a la pequeña burguesía republicana, por irracional que parezca, no tiene nada de sorprendente. De terratenientes y gendarmes del absolutismo, algunos miembros del clero, en el transcurso de la tardía revolución industrial de España, se habían convertido en importantes capitalistas, acabando ciertas órdenes religiosas por controlar grandes empresas del moderno capital financiero. Frente a este poder, más temible por ser impersonal, los movimientos de revuelta popular a menudo se desahogaban quemando conventos.

La Iglesia, que primero adquirió su carácter militante en la cruzada que, con el nombre de Reconquista, se prolongó por 700 años, pasó a adoptar formas plenamente totalitarias a raíz de la derrota de las revoluciones burguesas de principios del siglo XVI. Identificándose con la monarquía absoluta, logró sobrevivir, junto con otros vestigios semif feudales, a los cambios profundos en la configuración económica y social del país, sin renunciar en lo más mínimo a su soberana intolerancia. Al tocar llamada los militares sublevados, acudieron en el acto los «curas trabucaires», cuya especie no se había extinguido, ni mucho menos, con las guerras carlistas. En respuesta, la irrefrenable cólera popular liquidó a más de seis mil curas. Estas ejecuciones, totalmente inútiles desde el punto de vista de la revolución, resultaron sumamente perjudiciales. El sentimiento religioso quedaba fuertemente arraigado en el país, entre los campesinos (y España en 1936 seguía siendo un país principalmente agrícola) y una parte de la pequeña burguesía. Aun después de haberse generalizado una actitud de mayor indiferencia en materia de religión, se calculaba, en una encuesta de 1970, en cerca del 40 % de la población el número de católicos practicantes.<sup>29</sup> Es probable que, frente a un mero pronunciamiento militar, una parte de los católicos no se hubieran conmovido; al tratarse de la lucha contra el

---

<sup>29</sup> . Véase Ramón Tamames, *La República. La Era de Franco*, Madrid, 1973, págs. 373-374.

Antecristo, en cambio, tuvieron que tomar las armas en una nueva cruzada. Con la ayuda eficaz de los revolucionarios, el franquismo había ganado la base que le hacía falta para organizar un movimiento de masas.

Al igual que el socialismo de los revolucionarios, el «Movimiento» de los nacionalistas tuvo que estructurarse en plena lucha, uniendo en un conjunto viable —si no armonioso— sus tendencias dispares. Si el sentimiento religioso ofendido fue el motor de la cruzada, tal como ingenuamente se lo ofrecieron los revolucionarios, para levantar en el escenario una tramoya ideológica que impresionase al público se recurrió a la «España grande» de Felipe II. Un nacionalismo exacerbado encontraba su expresión en cierta mística con olor «a pólvora y a patria» que no dejó de fascinar a muchos jóvenes intelectuales de la clase media. Así, bien provistos de armas ideológicas perfectamente adaptadas al medio, al mismo tiempo que sus protectores fascistas los abastecían de cuantos pertrechos de guerra hicieran falta, los nacionalistas podían aguardar el resultado final con toda confianza.

Que mientras tanto muriesen hombres y más hombres era secundario. Ya en 1914 hubo quien equiparara la guerra moderna a una de las bellas artes.<sup>30</sup> Hoy día, cuando la guerra claramente ha llegado a ser una rama de las ciencias exactas, una de sus aplicaciones, la matanza de la población civil, el homicidio en masa de no combatientes, aun antes de Hiroshima o del Vietnam, se convirtió en una gran industria (a ratos bastante próspera; por ejemplo: ¿cuánto oro no se extraía a diario tan sólo de las dentaduras de los presos eliminados en los campos de exterminio nazis de la segunda guerra mundial?).

Es cierto que esa matanza, mucho antes de ser promovida a gran industria, cuando todavía se practicaba en forma artesanal, para no decir manualmente, ya constituía el medio predilecto de resolver los problemas más agudos que planteaba la lucha de clases. Así las «sangrías» que a lo largo del siglo XIX los generales franceses y, por último, el marqués de Galliffet, vencedor de la Comuna, imponían a los obreros de París. Pero, artesanía o industria, la matanza —y ésta es su particularidad— nunca ha sido objeto de estadísticas fidedignas. Los mismos alemanes, tan metódicos por otra parte, aun pretendiendo llevar cuentas exactas (?) en los ya mencionados campos, no hicieron la menor referencia a las multitudes que murieron afuera, en las estepas de Europa oriental, liquidadas, sin más, por los «Einsatzkommandos».

Al tratar de la guerra civil española, en la que no se recurrió todavía a una maquinaria perfeccionada, comparable a las cámaras de gas alemanas, para provocar esas muertes, las estimaciones de los historiadores, ninguna de ellas basada en datos concretos, varían enormemente. Pero, aunque el total de muertos, en su mayoría víctimas no de acciones guerreras, sino de represalias, fusilamientos sumarios o «paseos» en la retaguardia, no haya alcanzado la cifra más comúnmente citada de un millón, las estadísticas oficiales, después de meras 7.303 muertes violentas en 1935 (un promedio normal), señalan:

---

<sup>30</sup> Diego Ruiz, *La guerra d'oggi considerata come una delle Belle Arti*. Bolonia, 1914.

en 1936, 50.088	muertes violentas		
“ 1937, 58.011	“	“	
“ 1938, 51,346	“	“	
“ 1939, 50.072	“	“	
“ 1940, 33.394	“	“	
“ 1941, 24.522	(excluidos 240 accidentes)		
“ 1942, 16.420	“	239	“
“ 1943, 13.271	“	177	“
“ 1944, 15.006	“	168	“
“ 1945, 11.507	“	183	“
“ 1946, 11.609	“	216	“
“ 1947, 10.014	“	277	“

para volver a una cifra más normal de 8.985 en 1948.<sup>31</sup> Había que ser prudentes y precaverse de posibles adversarios futuros. En caso de duda, para no crear problemas, más valía ejecutar a los dudosos. Al lado de tal limpieza por el vacío, la misma Inquisición, con sus 34.382 condenados a muerte (en un total de 343.522 condenas) en tres siglos, parece extraordinariamente moderada.

Así fue posible cumplir por la vía más directa, o sea la eliminación física de cuantos pudieran manifestar alguna conciencia de clase, otro de los requisitos previos para instituir el fascismo: la derrota del proletariado. Ciudades, caminos y fábricas pueden reconstruirse en pocos años. Para reconstituir el capital humano, en cambio, hace falta más tiempo. Mientras tanto, el nuevo régimen puede instalarse, convenientemente abrigado por un sólido baluarte de cadáveres, en una plaza fuerte donde es posible aguantar todo el tiempo que sobrevive la generación traumatizada por la guerra, capeando, uno tras otro, los temporales sucesivos. A los murmuradores, basta amonestarlos: ¿Qué queréis, la paz actual o el caos de antes?

Desde el momento en que solícitamente el mundo capitalista decretó la intervención con nombre de «no intervención», la guerra de España no fue sino una guerra contra España. Al relatar e interpretar los hechos, sería, pues, ocioso distribuir elogios y censuras, como lo suelen hacer a posteriori los historiadores. La revolución española fue lo que tenía que ser: hija legítima de los pueblos ibéricos. Ni los socialistas, ni los comunistas, ni los anarcosindicalistas españoles tienen la culpa de su derrota final: su revolución nació tarde, en un mundo y en una época que no la podían admitir y que acabaron por estrangularla en el tira y afloja de un gran ballet internacional, dirigido desde la mesa de conferencias por los mayores coreógrafos de aquel tiempo.

<sup>31</sup> Presidencia del Gobierno, Instituto Nacional de Estadística, Anuario Estadístico de España, año XXVI, 1951, Síntesis estadística de la vida española en la primera mitad del siglo xx, pág. 17. (Fallecidos clasificados por causas de muerte.)

El golpe de gracia vino en septiembre de 1938, en Munich, al abandonar las democracias a su aliado checoslovaco. En los meses que siguieron, para salvarse en lo inmediato, su designio —y esto era un secreto público— fue más que nunca alentar un ataque alemán a la Unión Soviética. Pero, apenas terminada la reunión de Munich, Stalin, comprendiendo que no podía contar con Francia e Inglaterra, entabló con el mayor sigilo negociaciones con el Gobierno nazi, que culminaron en lo que innegablemente fue el golpe maestro de su «Realpolitik»: el pacto germano-soviético de 1939. Para que resultara esta jugada, tuvo que sacrificar al peón español.

La República perdió así su última esperanza de sobrevivir hasta que estallara el nuevo conflicto mundial. España iba a quedar sumida en lo que fue la pesadilla total de la Europa fascista de 1940. Pero en 1939, en vísperas del vendaval, ¿quién se preocupaba por los pobres del mundo?, ¿quién se fijaba ya en España?

## 5.

### *LAS POSTRIMERÍAS DEL CAPITALISMO*

Al producirse la gran crisis económica, la más larga y profunda de la historia del capitalismo, que principió en octubre de 1929 con el crac de la Bolsa de valores de Nueva York (y que en España iba a culminar en 1933), hubo quien pensara que el sistema capitalista había llegado a su fin. En un mundo de fábricas inmovilizadas, de comercios en quiebra, donde los trabajadores, especialmente los jóvenes, vagaban por las calles, sin esperanza de poder emplearse, ¿quién dudaría que la única salida del caos causado por el libre juego de las fuerzas que determinan la economía capitalista era socializar los medios de producción? En la Historia, empero, no existe la fatalidad; siempre queda abierta una alternativa, aunque sea la ya clásica entre socialismo y barbarie...

La incapacidad de los dirigentes de la clase obrera occidental de aprovechar la grave crisis de la sociedad capitalista para derrocar a la burguesía y establecer el socialismo permitió que ella resolviera una vez más la crisis en su favor. Sólo España hizo su revolución —cuando ya había triunfado la contrarrevolución en casi toda Europa—, tan a deshora que acabó ahogada en un río de sangre sin precedentes, una gigantesca Comuna.

Fue esencialmente el fracaso del movimiento obrero que iba a ofrecer al capitalismo la oportunidad de una nueva expansión. Primera consecuencia de tal fracaso, la victoria del fascismo en Europa y la segunda guerra mundial que éste desencadenó tuvieron por efecto inmediato una baja considerable del salario real de los trabajadores, privados ya de todos sus medios de defensa. Importante en Alemania, en Italia y el Japón, esta baja alcanzó proporciones descomunales en España, donde, según las estadísticas publicadas en 1950 (véase cuadro adjunto), en las que se tomó por base 1936, año de continuada crisis y de salarios bajos, la remuneración de los trabajadores se redujo en cerca del 30 %, a menos del mínimo indispensable para subsistir. Así el pueblo español tuvo que pagar —y con creces— la cuenta de la crisis y la de la guerra civil. Para resarcir los daños sufridos se le condenó a veinte años de hambre, pasados detrás de las murallas medievales de una sociedad inmóvil, regida esencialmente según el viejo adagio: «A pueblo bueno o malo, poco pan y mucho palo».

Números índices de las remuneraciones reales, máxima y mínima, por jornadas, que como cifra media nacional estimada corresponden a obreros de tipo profesional corriente, según los distintos grupos de actividad.

(Base: año 1036 = 100) Años 1939 y 1946 a 1948 <sup>32</sup>

ACTIVIDAD PROFESIONAL	MÁXIMOS				MÍNIMOS				
	1939	1946	1947	1948	1939	1946	1947	1948	
NÚMEROS ÍNDICES									
Mineros {	Hombres . . . . .	74	56	53	49	71	48	60	56
	Aprendices . . . . .	81	71	92	86	72	65	103	96
Metalúrgicos {	Hombres . . . . .	74	52	50	46	75	54	53	50
	Aprendices . . . . .	83	71	77	72	80	68	88	82
Textiles {	Hombres . . . . .	74	61	54	51	73	56	63	59
	Mujeres . . . . .	75	77	76	70	81	82	88	82
	Aprendices . . . . .	80	85	92	86	77	77	103	96
.....									
Agrícolas {	Hombres . . . . .	76	63	60	56	75	61	59	55
	Mujeres . . . . .	78	64	66	61	87	70	70	66
	Aprendices . . . . .	88	81	85	79	94	83	87	81

Asimismo, en un pasado más reciente, la instauración de regímenes de fuerza obedeció a la misma finalidad: en épocas de decreciente tasa de beneficio conviene compensar esa disminución por un aumento de la plusvalía, la cual suele obtenerse reduciendo el salario real. Sin hablar del golpe de Estado de 1973 en Chile, esto se logró en 1956 en la Argentina, después de desalojar a Perón. En el Brasil se calculó que a raíz del golpe militar de 1964 contra Goulart de Andrade, último representante del nacionalismo laborista de Getulio Vargas, el salario real de los obreros industriales de São Paulo se redujo en más del 15 % .

Este aumento de la plusvalía —inicialmente a expensas del salario real—, que se logró por la acción del fascismo o, en los países que seguían observando las reglas democráticas, al establecerse una estricta economía de guerra, iba a tener un carácter más duradero de lo que se pensaba. Poderosamente estimuladas por las necesidades de la misma guerra, las aplicaciones de la ciencia más adelantada en la producción tuvieron por resultado un avance tecnológico tan importante que muchas veces se le ha equiparado a una nueva revolución industrial. El incremento espectacular de la productividad del trabajo, debido a los nuevos métodos de producción y de transporte (aplicaciones de la electrónica, automatización, transportes aéreos, autopistas, contenedores, etc.), que se verificó en los países industrializados, sin que en ningún momento disminuyera el «ejército de reserva» industrial, continuamente alimentado por las olas sucesivas de refugiados, el éxodo rural o la inmigración de trabajadores de los países menos desarrollados, permitió que a la postre volviera a subir también el salario real, prácticamente congelado hasta después de la guerra.

<sup>32</sup> Presidencia del Gobierno, Instituto Nacional de Estadística, Anuario Estadístico de España, año XXV, 1950, página 604.

Pero si, por ejemplo, en los Estados Unidos la producción industrial aumentó en casi el 70 % entre 1947 y 1961, la productividad del trabajo en un 50 %, la remuneración por semana de trabajo apenas subió en un 29 %.<sup>33</sup> En el Japón, entre 1960 y 1965, la productividad del trabajo industrial (por obrero empleado) aumentó en el 48 % y el salario real en un mero 20 %.<sup>34</sup> En la República Federal de Alemania, la remuneración real de los trabajadores, mantenida en un nivel relativamente bajo desde la época de la dictadura nazi, no volvió a subir substancialmente hasta que disminuyeron las olas de refugiados, lográndose el pleno empleo, hacia 1960. Durante todo este período y en todos los países industrializados, los capitalistas disfrutaron, pues, de una fuerte plusvalía relativa y de una elevada tasa de beneficio. La aceleración consiguiente de la acumulación de capital, la expansión del mercado de bienes de consumo debido al aumento de los salarios, he aquí las características de lo que se ha llamado el «milagro económico» y que en España no se produjo hasta bien entrado el decenio de 1960.

El sistema capitalista, que en 1930 parecía definitivamente condenado, pudo así aprovechar una tregua de más de veinte años, con apenas una que otra breve «recesión» a partir de 1964, pero sin ninguna crisis o «depresión» grave, hasta 1974. Al referirse a esta nueva fase ascendente del capitalismo, sería erróneo, sin embargo, calificarla de «neocapitalismo» —tal como se puede hablar, por ejemplo, de «neocolonialismo»—, ya que no hubo solución de continuidad y que su evolución sigue obedeciendo a las mismas leyes que Marx definió hace un siglo. El movimiento cíclico de la producción, la expansión, seguida por una contracción, de la producción de mercancías, o sea de la producción de plusvalía, no se ha modificado. Aun la intervención cada vez más frecuente del Estado en favor de los grandes trusts y la consiguiente inflación de crédito, si bien pueden limitar en ciertas circunstancias los efectos de las recesiones o crisis, no logran impedirlos. Al principio se trataba en este caso de una inflación «reptante»; la inflación galopante quedó reservada para nuestros días de estancamiento, cuando finalmente se ha agotado, perdiendo su eficacia, toda la farmacopea keynesiana.

En la historia del capitalismo, desde la primera mitad del siglo XIX, cada revolución tecnológica marca el comienzo de un período de crecimiento acelerado, seguido luego por un período de relativo estancamiento (y de recesiones y crisis más frecuentes y profundas), al disminuir el ritmo de acumulación de capital, por disponerse de más y más medios de producción, después de generalizarse su elaboración mecánica. Tal como lo expone Mandel en su *Spätkapitalismus*, en el período de 1848 a 1873, el avance tecnológico que representaban las máquinas de vapor fue la causa de una expansión acelerada. De 1873 a 1893, habiéndose generalizado la producción mecánica de esas máquinas, disminuyó el beneficio obtenido con las mercancías que ellas producían, en una fase de relativo estancamiento. Nuevamente, entre 1894 y 1913, una revolución tecnológica determinó un fuerte aumento de la productividad del trabajo y una acumulación acrecentada de capital, con la introducción del motor de explosión y de la energía eléctrica (coincidiendo con el triunfo del imperialismo y la generalización de los monopolios). A este avance siguió, de 1914 hasta la segunda guerra mundial, un período de retroceso, con un solo intervalo de estabilización entre 1924 y 1929. A partir de la década de 1940, el nuevo período ascendente del capitalismo, caracterizado por un gran aumento de la pro-

---

<sup>33</sup> Ernest Mandel, *Der Spätkapitalismus*, Francfort, 1972, pág. 164.

<sup>34</sup> *Ibidem*, pág. 160.

ductividad del trabajo, debido al creciente manejo electrónico de las máquinas y la introducción paulatina de la energía nuclear, pudo prolongarse, sin percances graves, hasta la crisis actual.<sup>35</sup> La nueva fase de estancamiento que nos toca vivir, bien pudiera ser el último acto del ya largo drama capitalista, antes de que baje el telón.

Si, en sus postrimerías, el capitalismo escasamente justifica el prefijo de «neo», aún menos se puede hablar de una sociedad «postindustrial», cuando precisamente se ha logrado industrializar por fin todas las ramas de la economía, incluso en muchos países la misma agricultura. Ésta, tradicionalmente en una situación de «desfase» para con la economía de los países capitalistas, ha sufrido cambios profundos. En los Estados Unidos, según estadísticas del Department of Commerce, se ha calculado que la productividad del trabajo en la agricultura aumentó en un 540 % entre 1907 y 1967, y en un 520 % en la industria.<sup>36</sup> En 1972, la población agrícola ya no constituía más que un 4,2 % del total de la población activa de los Estados Unidos, lo que no impide que este país sea el granero de los tres mundos. Paralelamente, la población agrícola bajó al 3,1 % en Gran Bretaña, al 4,5 % en Bélgica, al 7,7 % en Suecia y al 7,2 % en Australia.<sup>37</sup> Mientras tanto, en España, de cerca del 70% a principios del siglo, la población agrícola bajó a un 26,1 % en 1973. «Para 1980, según datos de la Comisaría del Plan de Desarrollo, la población activa agrícola habrá descendido al 18,9 %<sup>38</sup> Y las cifras son aún excesivamente altas... Parece como si, al actual nivel de conocimientos técnicos y dadas las posibilidades de mecanización agrícola, un grupo de menos del 10 % de la población activa total fuera capaz de cubrir las necesidades alimenticias del total de población.»<sup>39</sup> Efectivamente, pese al innegable mejoramiento de los métodos de cultivo, la agricultura ha quedado rezagada en España. Si bien el número de tractores, de 4.300 en 1940, ya había subido a 40.000 en 1960, el índice de la producción agrícola por habitante aún no había alcanzado, en 1958, el nivel medio del período 1931-1935.<sup>40</sup> En los planes de desarrollo de los años 60 «se pretende olvidar por completo la cuestión agraria, con lo cual se retrasa sine die la transformación del campo español y la solución de uno de los problemas claves, casi el "talón de Aquiles" de nuestro desarrollo económico».<sup>41</sup>

Para industrializar efectivamente el campo se requieren medios que no siempre están al alcance de los países que tienen este propósito, y la agricultura sigue siendo el talón de Aquiles de muchas economías, comprendida la de la misma Unión Soviética. En España, donde la cuestión agraria fue una de las causas inmediatas de la guerra civil, cupo asimismo al sector agrícola desempeñar un papel del todo especial en el repentino arranque para incorporar al país en el plazo más breve al mundo industrial del siglo XX, lo cual se logró en gran parte mediante el sacrificio deliberado de la agricultura... y de los agricultores.

El país, al que la guerra civil había dejado exangüe y que durante más de un decenio estuvo vegetando, en lo político como en lo económico, detrás de barreras poco menos

---

<sup>35</sup> *Ibidem*, págs. 101-131.

<sup>36</sup> *Ibidem*, pág. 388.

<sup>37</sup> OIT, Anuario de estadísticas del trabajo, 1973, páginas 86 y sigs.

<sup>38</sup> III Plan de Desarrollo, Agricultura, Madrid, 1972, página 59

<sup>39</sup> José Félix Tezanos, Estructura de clases en la España actual, Madrid, 1975, pág. 97.

<sup>40</sup> OIT, La situación laboral y sindical en España, Ginebra, 1969, pág. 30.

<sup>41</sup> «Lo cual parece estar plenamente en correspondencia con la extracción social —terratenientes— de la mayoría de los responsables actuales de la política agraria española.» (Ramón Tamames, España ante

que infranqueables, en un inmovilismo total, sólo logró reponerse después de 1950. Impuesto por la guerra mundial y luego por la resolución de las Naciones Unidas aprobada en 1946 para condenar al franquismo por su asociación con las potencias del «eje» fascista, este aislamiento —si bien el bloqueo nunca llegó a ser completo— coincidió con un período de estancamiento casi total, de inflación «reptante», de escasez de materias primas y de hambre y miseria apenas mitigadas por los balones de oxígeno suministrados por Perú. En un régimen de autarquía, el monopolio de Estado del INI se esforzaba por fomentar industrias en gran parte parasitarias. Pero aunque España no había sido admitida entre los beneficiarios del Plan Marshall, al agudizarse la guerra fría, aún antes de concertarse los acuerdos de 1953, los Estados Unidos, en vista del valor estratégico de la Península, acabaron por prestarle su ayuda otorgando créditos. Sin embargo, hasta 1951 la renta nacional no llegó a rebasar el nivel de 1935. Fue también en 1951 que finalmente se suprimió el racionamiento de alimentos y que por primera vez se manifestó, con renovado dinamismo, el movimiento obrero en las huelgas de Barcelona.

El ritmo de la evolución de las sociedades humanas ya había ido acelerándose notablemente en el curso de los últimos siglos,<sup>42</sup> sobre todo desde que, al finalizar la Edad Media, se formaron los primeros núcleos del naciente capitalismo. Debido a esa aceleración progresiva, el proceso histórico, en su fase actual, ha alcanzado una velocidad todavía inconcebible para muchos de los que están padeciendo sus efectos, condensándose en pocos años experiencias que antes se hubiera tardado siglos en adquirir. Cuando por fin España despertó de su letargo, entrado ya el decenio de 1950, el mundo se había transformado totalmente. Estaba en plena expansión el capitalismo revigorizado por la nueva revolución tecnológica. El clima europeo no era ya de autarquía: aun teniendo en cuenta el innegable talento franquista de aplazar lo inevitable, había que cambiar de rumbo.

Sin ser determinante por sí sola, la ayuda americana «de apoyo a la defensa» fue un factor esencial de ese cambio. Facilitó la financiación del desarrollo, aunque los bienes de producción sólo representaban un 14,5 % de dicha ayuda,<sup>43</sup> que consistió sobre todo en materias primas y alimentos de los que los Estados Unidos tenían cuantiosos excedentes, pero que permitieron mitigar la escasez ya crónica que padecía España. Los acuerdos de 1953, si bien abrieron la puerta a la penetración de capitales americanos, no surtieron de inmediato todos sus efectos. Para ello había que estabilizar los precios, crear reservas, reorganizar la circulación de mercancías, lo que, debido a la inercia del aparato burocrático, no se logró hasta aplicar en 1959 el llamado «Plan de Estabilización», brutalmente deflacionista, cuya ejecución ya estuvo a cargo de tecnócratas de la nueva generación. Así, la verdadera edad de oro de las inversiones americanas no principió hasta después de 1960.

Al surgir —al cabo de los años de crisis y de guerra— el capitalismo en su nuevo ropaje electrónico, se puso de manifiesto que también el imperialismo, llegado ahora a su fase culminante, había cambiado, si no en su esencia, en su forma y modo de actuar.

A principios del siglo, la explotación imperialista tomaba por lo general la forma de una transferencia directa del superbeneficio colonial a las grandes empresas de la metrópoli. Al concederse la independencia a las colonias, sustituyéndose la dominación directa por

---

un segundo plan de desarrollo, Barcelona, 1968, pág. 210.)

<sup>42</sup> En realidad, esta aceleración comenzó el día en que el hombre aprendió a encender un fuego.

<sup>43</sup> OIT, La situación laboral y sindical en España, Ginebra, 1969, pág. 30.

la indirecta del neocolonialismo, esta explotación se viene realizando cada vez más mediante un intercambio desigual, primero de materias primas y alimentos por artículos de consumo industriales y luego —a medida que un país logra crear su propia industria endeudándose irremediabilmente— de productos de su industria por máquinas, equipo y vehículos. Intercambio desigual, por considerarse en estos tratos como equivalente del producto importado por el país en desarrollo, un artículo cuya producción puede haber costado dos, tres o cuatro veces más horas de trabajo, pues en el mercado mundial, regido por los trusts imperialistas, se atribuye al trabajo realizado en los países industriales un valor superior al del trabajo hecho en un país subdesarrollado.

Valiéndose de esta aritmética se han podido transferir anualmente decenas de miles de millones de dólares del tercer mundo a los países industrializados. Así, por ejemplo, se ha calculado que entre 1951 y 1966 las pérdidas de América Latina por el intercambio desigual ascendieron a 26.400 millones de dólares, o sea, mucho más que la «ayuda al desarrollo» que ese continente recibió en aquel período.

Esta nueva forma de la explotación imperialista corresponde a la creciente centralización internacional del capital que se viene observando desde la segunda guerra mundial. El órgano del que se vale el imperialismo moderno para ejercer su dominio es, cada vez más, la empresa multinacional. A principios del siglo, en la era de las expediciones coloniales —aun cuando la producción industrial, por su volumen y complejidad, ya constituía una función social—, el gran capital estaba íntimamente asociado con el poder militar de los países imperialistas, que rivalizaban por conquistar nuevos mercados y fuentes de materias primas. La ya considerable concentración del capital, sin embargo, no había llevado todavía a su centralización en el plano internacional. Hoy día, la producción industrial, en más de un ramo, constituye una función, además de social, internacional, por necesitar mano de obra, materias primas, tecnología y servicios que un solo país no puede suministrar. Logran este resultado las empresas multinacionales, en las que predominan casi siempre los intereses norteamericanos —aun cuando oficialmente proceden de otro país de origen,—, ya por su enorme peso y volumen frente a sus más flacos competidores europeo y japonés, pues para controlar una empresa no hace falta, ni mucho menos, poseer la mayoría del capital. Por otra parte, estas empresas, por su misma índole, están en condiciones de saltar por encima de las barreras arancelarias, produciendo donde más les convenga y vendiendo en los mercados que les sean más favorables. En 1972-73, las multinacionales ya controlaban el 20 % de la producción y el 30 % de las exportaciones, corriendo por su cuenta el 50 % del movimiento internacional de capitales.<sup>44</sup> Es la época de los «take-over», las fusiones y absorciones de empresas, en que el lobo, cada vez más hambriento, en un santiamén se traga a otro lobo.

Entre el país subdesarrollado y el industrializado, pasando por el semiindustrializado, existen una infinidad de matices que el imperialismo, en su práctica, ha tenido en buena cuenta.

En el Perú, por ejemplo, debido a la insuficiente acumulación de capital, el crédito, hasta hace poco, seguía siendo un monopolio de la banca imperialista, que, negándose a renovar los créditos vencidos, a menudo lograba posesionarse de industrias establecidas por los nacionales del país. No es sorprendente, por lo tanto, que en 1968 la burguesía

---

<sup>44</sup> Ernest Mandel, *El dólar y la crisis del imperialismo*, México, 1974, pág. 28.

peruana haya apoyado la revolución de los militares que nacionalizaron las empresas controladas por los trusts norteamericanos. En el Brasil, en cambio, lo mismo que en la Argentina, la acumulación de capital a raíz de las guerras mundiales ya había alcanzado un nivel respetable. Los dueños de las grandes empresas brasileñas, nacionalistas en la época de Getulio Vargas, una vez considerablemente enriquecidos, no tardaron en «desnacionalizarse», cuando los trusts multinacionales los juzgaron dignos, por su importancia, de ingresar en el círculo de los elegidos como socios efectivos —siempre bajo el control norteamericano, se entiende.

España, que hasta mediados del siglo no fue más que un país semiindustrializado, ha seguido una evolución análoga y, a partir de 1957, la penetración norteamericana ha podido realizarse en condiciones excepcionalmente favorables para ella.

Para facilitarla, en conformidad con los sucesivos planes de industrialización, se contaba con un núcleo de tecnócratas, formados en la escuela americana, que no pertenecían ya a la generación directamente condicionada por la guerra civil. Buenos católicos, por encima de toda sospecha y dando pruebas de una cohesión y solidaridad casi masónicas, los socios del Opus Dei y sus acólitos pudieron conquistar el poder desde el interior del Estado franquista. El régimen —bien lo sabían— tenía sus rasgos arcaicos, pero hubiera sido inútil intentar reformarlo. De todos modos, el Caudillo era inamovible. En cambio, su poder, único en los países adelantados del Occidente por ser el último poder absoluto, ofrecía facilidades incomparables para realizar, en su sombra y fuera de todo control, negocios fabulosos. Cuando finalmente los del Opus Dei llegaron a formar algo como la versión moderna de la clásica camarilla que rodeaba al monarca español, las empresas que gozaban del favor oficial crecieron y se multiplicaron como hongos. Fue el Gobierno del «big business», por el «big business», para el «big business».

Para acelerar la industrialización se procuró por los medios más ingeniosos sacar capital suplementario del sector agrícola, a fin de invertirlo en la industria, quedando las provincias que no participaban en el desarrollo industrial —especialmente las del sur agrícola— reducidas a la condición de una colonia interior, fuente de un superbeneficio. Este resultado se logró sobre todo mediante el intercambio desigual de productos industriales por los productos agrícolas. De 1957 a 1965, los precios que en el mercado se pagaban por estos últimos aumentaron en un mero 67,1 %, al paso que los precios de los productos industriales —los precios que los agricultores tenían que pagar por la maquinaria, los aperos y abonos indispensables— subieron en un 142,7 %. La consiguiente proletarización de grandes masas de campesinos resultó sumamente ventajosa para los industriales de otras regiones y sus patrocinadores norteamericanos; el éxodo rural al que dio motivo facilitó enormemente esta «nueva revolución industrial». Entre 1951 y 1960, cerca de un millón de agricultores abandonaron el campo, seguidos, en el quinquenio 1961-1965, por otros 877.373.<sup>45</sup> De dos millones en 1939, el número de obreros agrícolas, o sea de campesinos sin tierra, bajó a unos 700.000 en 1971, según el cálculo de Tamames,<sup>46</sup> disminuyendo, en consecuencia, la tensión en las provincias latifundistas y los motivos de conflicto que por tanto tiempo fueron un motivo latente para el poder establecido. Gracias a la constante migración de estas masas a los centros industriales se logró mantener el ejército de reserva industrial en un nivel ventajoso, lo que permitía li-

---

<sup>45</sup> Ramón Tamames, *La República, La Era de Franco*, Madrid, 1973, pág. 412

<sup>46</sup> *Ibíd.*, pág.391

PRODUCTO NACIONAL BRUTO <sup>47</sup>

Año	Ptas. corrientes	
	(miles de millones)	Indice (1935 = 100)
1942	78,4	83,0
1943	81,2	83,4
1944	88,0	84,2
1945	86,7	76,2
1946	131,1	89,7
1947	157,6	90,9
1948	165,0	88,6
1949	174,7	87,8
1950	210,3	93,1
1951	273,8	104,1
1952	293,9	112,2
1953	305,0	111,3
1954	336,7	120,8
1955	375,6	125,9
1956	431,7	133,7
1957	506,1	138,1
1958	581,8	142,3
1959	603,4	139,8
1960	620,4	140,7
1961	706,6	155,7
1962	816,7	168,1
1963	963,9	182,5
1964	1.088,0	190,6
1965	1.287,0	202,1
1966	1.477,3	215,9
1967	1.632,1	223,8
1968	1.804,9	234,2
1969	2.010,5	251,3
1970	2.252,4	
1971	2.537,8	
1972	2.960,4 *	

\*Cifras de avance.

mitar el aumento de los salarios a lo que era necesario para alimentar el mercado interior. De 1958 a 1967, mientras la productividad del trabajo industrial aumentó en un 88,5 %, el salario real de los trabajadores subió en un mero 44,6 %, lo que indica una tasa de plusvalía que no podía dejar de convencer a los inversionistas americanos. Por otra parte, este éxodo rural coincidió con un espectacular desarrollo de la economía en los países del mercado común europeo, necesitados de mano de obra. Para satisfacer esta demanda —y evitar un incremento importante del paro forzoso—, España, se dedicó a la exportación de trabajadores, un poco como antaño, en el siglo XVIII, ciertos príncipes alemanes se ganaban la vida vendiendo a sus súbditos como soldados a los reyes de Francia e Inglaterra. Después del turismo, una fuente apreciable de divisas, los obreros emigrados enviaban ya a fines de la década de 1960 más de 400 millones de dólares anuales a España, subiendo estas remesas a 650 millones en 1970.

No es de admirar que, en vista de una base tan envidiable por su aparente solidez, la

<sup>47</sup> Ramón Tamames, *La República, La Era de Franco*, Madrid, 1973, pág. 420. y Ministerio de Planificación del Desarrollo, Instituto Nacional de Estadísticas: *Anuario Estadístico de España*, 1975, pág. 259.

mayoría de las grandes compañías norteamericanas se apresurasen a crear filiales, o adquirir empresas ya establecidas en España, con fondos procedentes, sea directamente de los Estados Unidos, sea de Suiza y otros países de Europa en que disponen de saldos importantes. Estas inversiones, que se fueron multiplicando a partir de 1959, se concentraban sobre todo en las industrias básicas, tales como siderurgia, productos químicos, petroquímica, construcción de maquinaria, etc. Conforme al ritmo acelerado del desarrollo industrial, la penetración norteamericana en España resultó más absoluta e infinitamente más dinámica que la francoinglesa a principios del siglo, en la época «clásica» del imperialismo. Encontrando, como lo encontraron, un campo abierto en el capitalismo relativamente débil de España, las compañías americanas o transnacionales pudieron actuar a sus anchas, arrancando jirones del patrimonio nacional (lo que en la Europa del Mercado Común les hubiera costado mucho más caro). Así fueron a parar en sus manos instituciones venerables, como el Banco Urquijo, el Banco de Santander, Altos Hornos de Vizcaya, etc., para no mencionar más que la parte visible del iceberg. Teniendo en cuenta el grado de interpenetración, de índole típicamente monopolista, de las grandes empresas españolas, esto o significa que hoy por hoy la casi totalidad de la economía española se halla directa o indirectamente bajo el dominio norteamericano.

El mayor tributo, por sí solo, es el que la economía nacional tiene que pagar por el «knowhow», o sea los conocimientos técnicos suministrados por las grandes compañías extranjeras. Estas «rentas tecnológicas» son una de las formas más características de la explotación, tal como hoy día la practican las empresas multinacionales. Forzadas a renovar su equipo en un plazo cada vez más breve, para tener en cuenta la constante aceleración del desarrollo tecnológico y recuperar los enormes gastos de investigación y aplicación práctica de los nuevos procedimientos, estas empresas tienen que aumentar su producción y sus ventas al máximo posible --internacionalizándolas—. Al enumerar sus «motivos de preocupación relativos a las actividades de las empresas transnacionales» (ET), el Grupo de los 77 países en vías de desarrollo se refiere, entre otros, a «la excesiva salida de recursos financieros de los países huéspedes, debida a las prácticas de las ET...; la adquisición y control por las ET de empresas nacionales dotadas de capital local, mediante el suministro controlado de tecnología...; la obstrucción o limitación por las ET del acceso de los países huéspedes a la tecnología mundial; la imposición de prácticas comerciales restrictivas, entre otras, a las filiales de los países en desarrollo, como precio del suministro de conocimientos técnicos...»<sup>48</sup>

España, que no forma parte del tercer mundo, pero figura hoy en buen lugar entre los países industrializados, depende, sin embargo, casi exclusivamente de la tecnología extranjera, teniendo ya en 1968 que abonar anualmente alrededor de diez mil millones de pesetas por licencias, patentes o marcas y asistencia técnica. Sin este aporte extranjero, vital para la casi totalidad de su producción, la industria española no podría trabajar. Conscientes de cumplir una función esencial y seguros de la protección de un Gobierno que con mano fuerte procura tener a raya a los posibles perturbadores, las compañías multinacionales van a las suyas sin miramientos excesivos, pues ¿quién puede pensar seriamente en desalojarlas?, sólidamente instaladas como están en estas tierras: un ele-

---

<sup>48</sup> Comisión de Empresas Transnacionales. Informe sobre el primer período de sesiones (17 a 28 de marzo de 1975), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales: 59º, período de sesiones. Suplemento n.º.12, Naciones Unidas, Nueva York, 1975, pág. 22.

fante sentado en una mosca.

Así, el franquismo, en su nueva fase, parece haber perdido algo de su gusto por el olor de la «patria» que inspiró sus primeros pasos. Pero aunque «la burguesía industrial española está perdiendo rápidamente su carácter nacional, para dejarse interpenetrar por los grupos de intereses económicos internacionales»,<sup>49</sup> en el mundo de hoy no ha sido, ni mucho menos, la única en desnacionalizarse. Frente a ella, en rebeldía permanente contra el poder de los tecnócratas, servidores incondicionales de la plutocracia mundial (que por lo visto ejerce su dominio mucho más allá de los países propiamente subdesarrollados), una clase obrera que ha recobrado su combatividad de antaño, adquiriendo además la madurez y visión política de que carecía en 1936, viene luchando hace años en condiciones particularmente difíciles y a menudo dramáticas.

Desde el principio, los fascismos europeos, para poder más impunemente destruir los sindicatos obreros, proclamaron su intención de establecer un Estado «corporativista». Las corporaciones, desde luego, nunca llegaron a tener existencia real; el «corporativismo» sirvió sobre todo para mantener una numerosa burocracia y distribuir prebendas a los amigos del régimen. En España, los llamados «sindicatos verticales» del Estado no tenían otra finalidad. Cuando la clase obrera se rehizo, no tardó en forjar sus propias armas, clandestinamente y valiéndose de toda su inventiva e ingeniosidad. Para luchar, en la ilegalidad, contra las fuerzas coligadas de un patronato de derecho divino y del Estado totalitario, las comisiones obreras constituían sin duda alguna el recurso más apropiado: difíciles de agarrar, tan pronto disueltas como formadas, lograban a menudo escapar a la represión. Frente a la organización más rígida del sindicato, la comisión obrera aparece, pues, como la guerrilla frente al ejército regular. De los llamados «sindicatos verticales», las comisiones obreras se distinguen, además, por su carácter verdaderamente representativo. Es así que muchos patronos, al plantearse un conflicto, no vacilan en tratar con ellas, pues prefieren, como es natural, negociar con un interlocutor responsable.

He aquí una de las situaciones características de la España actual, cuyas estructuras políticas, tales como resultaron de la guerra civil, desde hace tiempo no corresponden a la realidad social y económica. Debajo de las formas cada vez más fosilizadas del Estado franquista se ha ido realizando una mutación completa. Desde el momento en que los tecnócratas, actuando un poco como el aprendiz de brujo, desencadenaron este torbellino, al lanzar el Plan de Estabilización y los planes de desarrollo sucesivos, la sociedad española tradicional quedó profundamente trastornada. La proletarianización de un sector de la pequeña burguesía urbana, junto con la de masas de campesinos pequeños propietarios, si tuvo efectos beneficiosos para una industrialización llevada a cabo a marchas forzadas, a la larga iba a acarrear un grave perjuicio para el régimen. De esta pequeña burguesía y estas masas de campesinos propietarios de fincas modestas procede, en su gran mayoría, el bajo clero que desde el principio había sido el sostén más fiel del movimiento franquista. Su cambio de frente total en el espacio de una generación, para adoptar una actitud de oposición, si no de protesta, que va repercutiendo más y más en la misma jerarquía, no puede atribuirse únicamente al concilio Vaticano II, aunque éste lo permitió y estimuló hasta cierto punto. El «aggiornamento» promovido por Vaticano II, lo mismo que para España, valía para Portugal, donde, sin embargo, el clero no se ha

---

<sup>49</sup> Ramón Tamames, *La lucha contra los monopolios*, Madrid, 1970, pág.385.

movido desde los tiempos del cardenal Cerejeira —ni siquiera durante las tormentas revolucionarias de 1974-1975-.

Si el franquismo, a consecuencia del trastornamiento de los valores sociales, perdió el apoyo de lo que había sido la más firme de sus bases, no dejó de ganar, por otra parte, la adhesión no menos entusiasta de una nueva pequeña burguesía, compuesta esencialmente del personal de los nuevos servicios y de la numerosa burocracia de los organismos estatales y paraestatales creados por el régimen, así como de cuantos viven del turismo, todos ellos favorables a Franco, o tal vez —si éste no hubiera existido— a los mismos tecnócratas, representantes del gran capital, instalados en el Gobierno. Que dichos tecnócratas fuesen partidarios o adversarios del Opus Dei, poco importaba para el régimen: lo esencial era que éste pudiera sobrevivir a su fundador.

Previsor y prudente, Franco trató de colmar de antemano el vacío que iba a dejar su muerte, ideando para sucederle una monarquía sintética. Con sus órganos e instituciones sólidamente atrincherados, el régimen quedaría prorrogado por sí mismo. Sus ministros, por liberales que se declarasen, no podrían resolver la cuadratura del círculo que plantea la «democratización» en España —ni aun los que ansiaban ponerse al servicio de los monopolios que regentan el Mercado Común europeo—. Pues si todos saben cómo comienza esa «democratización», nadie sabe adónde puede llevar, y sería vano esperar que la plutocracia —cualquiera que sea el clan dominante— y los gobernantes a su servicio se hagan el harakiri. Estaba visto que Francisco Franco y Bahamonde no podía tener otro sucesor que Francisco Franco y Bahamonde.

Sin embargo, una vez instaurada y frente a la realidad política, esa monarquía sintética, por el hecho de ser la obra póstuma del Caudillo, tiene cuanto menos la ventaja de no estar expuesta a un golpe de Estado de los «ultras» del llamado «bunker», reacios aún a los ajustes imprescindibles para el ingreso de España en la Europa de los monopolios, la cual requiere que sus miembros ostenten una fachada más liberal. Por otra parte, debido a la creciente presión de las masas populares, a la que ya no es posible resistir con los medios tradicionales de represión, urge encontrar una válvula de escape. Todo ello puede llevar a los dirigentes, sean cuales fueren, a hacer concesiones que no estaban previstas inicialmente.

Pero estas concesiones tendrán forzosamente límites muy estrechos. La transformación de la sociedad española, por necesaria que sea y por más que la desee la mayoría del pueblo, no podrá lograrse sino en un contexto mundial que la favorezca. En la actualidad, una experiencia como la del Frente Popular de 1936 en Francia y España es aún más irrealizable de lo que ya fue en aquel entonces —vale decir que tendría apenas mejor suerte que la revolución portuguesa de 1974-1975-. En un mundo tan netamente dividido en esferas de intereses, la independencia cuesta sumamente caro, es dudoso que hoy por hoy muchos pueblos del mundo industrializado estén dispuestos a pagar el precio que el Vietnam tuvo que pagar por la suya. Para mantener el orden establecido, el imperialismo tiene sus gendames privilegiados: el Brasil en América Latina, el Irán en el Medio Oriente y la prderosa República Federal de Alemania en Europa. Sin llegar a los extremos a que se llegó en Chile en 1973, la mera amenaza de cortar los créditos a los países en crisis obra verdaderos milagros de sumisión y disciplina. Para desacatar las órdenes de los que esgrimen el palo grueso hace falta algo más que ganar las elecciones en un país determinado. Es precisa una perfecta coordinación internacional, que en el

día de hoy existe apenas en estado embrionario.

Ya pasó la época de las revoluciones productos de exportación. La revolución rusa de octubre de 1917, cuya imitación consciente y concienzuda en otros ámbitos tantos fracasos valió al movimiento obrero y que por muchas de sus características fue la última revolución del siglo XIX, ocurrió en un país subdesarrollado que aún no había logrado acceder a la democracia burguesa. El centralismo burocrático, que forzosamente hubo de ser su resultado final, a raíz de la segunda guerra mundial fue impuesto, sin excesivos miramientos, a los países limítrofes. Cuando, en 1968, el Partido Comunista checoslovaco quiso proceder a los ajustes que juzgaba necesarios en un país de tradición occidental, industrializado hacía tiempo, cundió la alarma entre los dirigentes de la Unión Soviética: el mal ejemplo checoslovaco podía tener consecuencias perjudiciales para el centralismo burocrático en otros países de la esfera de intereses soviética. Pero tampoco el imperialismo americano debía ver con buenos ojos el éxito de un régimen socialista que podía servir como ejemplo a los países del Occidente. Si bien derramó algunas lágrimas de cocodrilo, no dejó de sentir cierto alivio cuando los ejércitos del Tratado de Varsovia metieron en razón a los dirigentes de Checoslovaquia, lo cual —hay que reconocerlo— se llevó a cabo un poco menos brutalmente que las acciones de dicho imperialismo en Guatemala (1954), Santo Domingo (1965 ) y Chile (1973) (en Cuba no se logró, por mucho que se intentara), para no hablar más que del hemisferio occidental.

Todos los ejemplos demuestran la necesidad absoluta de una acción común de los pueblos decididos a adoptar un régimen socialista. Si éste, por una parte, debe conformarse al carácter y tradiciones nacionales de cada país, por otra, necesita, para poder sobrevivir y afianzarse, un máximo de solidaridad activa en el ámbito internacional. Los monopolios capitalistas hace tiempo que se han internacionalizado; para resistir sus embates, la revolución socialista, a su vez, debe combatirlos en el mundo entero y en todos sus reductos. La lucha de clases, hoy, es internacional.

Tan sólo teniendo en cuenta a la vez sus premisas internacionales y su carácter eminentemente nacional se puede tener la esperanza de edificar el socialismo. En España, que por sí sola ya es todo un continente en miniatura, esto significa actuar de conformidad con la tradición viva de cada uno de los pueblos de la península y las particularidades de su desarrollo económico. Pues ¡cuántas diferencias no hay ya en el régimen de propiedad territorial de las diversas regiones!, diferencias que habrán de determinar la forma y el contenido, no ya de la «Reforma Agraria», sino de toda la serie de reformas imprescindibles.

Con estas salvedades, y después de llegar a un acuerdo con los amplios sectores de la opinión católica que no defienden el capitalismo —un acuerdo cuya falta tuvo consecuencias fatales en Chile de 1970 a 1973-, no es imposible que en un futuro no muy lejano se implante el socialismo en un extenso arco de países, de Lisboa a Atenas, comprendiendo España, Francia e Italia. .

Aun así, habrá que vencer un sinnúmero de dificultades, no siempre fáciles de prever, consintiendo en muchos sacrificios, pues la burguesía ya no respetará las reglas de la democracia, tales como las formuló ella misma, desde el momento en que su aplicación deje de aprovecharle, y, junto con ella, el imperialismo y sus gendarmes, a su vez, no dejarán de emplear los más variados medios de presión, sabotando la moneda nacional,

valiéndose de las formas más sutiles de boicoteo económico y patrocinando —tal como ha vuelto a ponerse de moda— la violencia de bandas armadas de fascistas.

Entre tanto, irresistiblemente, el sistema de producción capitalista se va acercando a su límite absoluto.

Al igual que en las crisis pasadas de la economía capitalista, también la depresión de 1975 está llegando a su fin, si bien deja un paro forzoso residual que no se podrá reabsorber. No volverá a registrarse, tal como en las décadas de 1950 o y 1960p, una expansión continua de la producción, generando el pleno empleo y una elevación constante del nivel de vida de los trabajadores. Entrado en su fase postrera, el capitalismo acaba muriendo de las consecuencias de su propio desarrollo.

En esta nueva fase de relativo estancamiento, tal como sucedió al generalizarse en el siglo pasado la elaboración mecánica de máquinas de vapor, o entre las dos guerras mundiales, la de máquinas eléctricas y motores de explosión, los medios de producción electrónicos, a su vez, comienzan a producirse mediante procesos automatizados.

Debido a la producción automatizada, que se caracteriza por la elevada composición orgánica del capital, o sea la sustitución del trabajo vivo por el muerto, del hombre por la máquina, han ido disminuyendo progresivamente las horas de trabajo necesarias en muchos ramos, tales como la siderurgia, la industria textil, etc. En el refinado de petróleo, el tiempo necesario para producir 10.000 toneladas de gasolina, de 56 horas en 1913, ya en 1955 se había reducido a 24 minutos. Hoy día, en los sectores de vanguardia de la petroquímica, la parte que corresponde a sueldos y salarios no equivale a más del 0,02 % del costo de producción de benzol de etilo, al 0,03 % del de acetileno y al 0,01 % del de cloruro de vinilo.

Este aumento fantástico de la productividad del trabajo ha demostrado aún más claramente la incapacidad fundamental del sistema capitalista de resolver ninguno de los problemas que se plantean al hombre hoy día. Su resultado más conspicuo ha sido el creciente despilfarro de las fuerzas productivas, materiales tanto como humanas. Entre otros, cabe señalar aquí el rearme, pero también la insensata proliferación de los automóviles privados (generalmente ocupados por una sola persona) en las ciudades ya congestionadas y poco menos que inhabitables, siendo el automóvil el verdadero fetiche de la economía capitalista y su producción el más poderoso de los intereses creados. Por otra parte, esta industrialización caótica, sin más finalidad que el beneficio inmediato de un puñado de especuladores, tuvo por efecto más tangible las monstruosidades de la urbanización actual, la contaminación del medio ambiente, la ruptura del equilibrio ecológico.

Hasta una fecha muy reciente, sin embargo, la industria productora de los medios de producción electrónicos se caracterizaba todavía por la baja composición orgánica del capital, absorbiendo los sueldos y salarios hasta el 50 % de los gastos de producción.

Y he aquí que últimamente esta industria ha comenzado a automatizarse a su vez, inaugurándose una nueva era de crisis periódicas de sobreproducción, debido al exceso de capacidad de las ramas dedicadas a la producción de medios de producción. Así, por ejemplo, «la International Computers Limited (I. C. L.), la empresa británica de construcción de computadores, habrá de reducir su personal. La dirección del grupo anunció el 21 de julio [de 1976] que iba a suprimir, hasta septiembre de 1977, 1.400 empleos de

los 9.000 de su división industrial. Esta decisión no está motivada, ni mucho menos, por una disminución de las actividades. Al contrario, la I. C. L. afirma que los pedidos han aumentado considerablemente. La revolución tecnológica en materia de informática reveló nuevos materiales que requieren una mano de obra mucho menos numerosa».<sup>50</sup>

El día, quizá no tan lejano, en que todas las actividades industriales queden automatizadas, el sistema capitalista habrá alcanzado su límite absoluto, pues, al eliminarse del proceso de producción la fuerza de trabajo viva, ya no será posible realizar una plusvalía. En la medida en que se van reduciendo las horas de trabajo efectivo, debido a una creciente automatización, resulta más difícil mejorar el salario real (y hoy día el valor de la fuerza de trabajo en los países industrializados ya incluye el coche, la televisión, la máquina de lavar y otros “gadgets”o artefactos útiles o de juguete) y al mismo tiempo mantener una plusvalía constante. La tasa de beneficio habrá de disminuir forzosamente.

Para contrarrestar esta evolución ya no será factible endosar como antaño el pasivo a los productores de materias primas, sacándoles un superbeneficio compensador, puesto que inevitablemente éstos acaban por unirse —como ya se unieron los productores de petróleo— para defender sus intereses. Sería concebible, en cambio, un nuevo fascismo para tratar de rebajar, o siquiera congelar, el salario real. A fin de instaurar este fascismo habría que fomentar primeramente una violenta agitación guerrera, lo cual sería relativamente fácil, disponiendo, como se dispone, del monopolio de los medios de información. Pero esta maniobra para capear el temporal y aplazar lo inevitable tampoco resolvería el problema: la rebaja, o congelación, del salario no deja de ser un arma de doble filo, dado que la venta del producto, o sea la realización del beneficio, depende en primer lugar del poder adquisitivo de las masas, es decir, del salario. Por fatal que a la larga sea su resultado para el sistema capitalista, los procesos de producción automatizada habrán de generalizarse, impulsados por el mismo juego de la competencia, que es la ley del capitalismo. Pero la eliminación progresiva de casi todo trabajo físico y su sustitución por un mero trabajo intelectual, disminuyendo más y más el beneficio realizado, entrañan la desaparición del proletariado y, por consiguiente, de la misma burguesía: la sociedad sin clases

---

<sup>50</sup> *Le Monde*, 25-26 de julio de 1976

Esta obra, publicada por  
EDICIONES GRIJALBO, S. A.,  
terminóse de imprimir en los talleres  
de ATENAS, A. G., de Barcelona,  
el día 15 de junio  
de 1977

# ENSAYO MARXISTA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA

Desde el fracaso de la revolución democrática del siglo XVI, cuyas consecuencias el pueblo español ha estado pagando hasta el día de hoy, la historia de España ha sido —salvo en breves intervalos— la historia de la represión. Este ensayo de interpretación se publicó por primera vez en 1934, poco antes de la sublevación asturiana. Al cabo de cuarenta años de historia vivida, el autor volvió a tomar la pluma para completar su obra. Describe en un epílogo la forma particular que el fascismo tomó en España y las características de la economía capitalista en su última fase, con sus repercusiones y las perspectivas de su inevitable superación.

FEDOR  
GANZ

Nació en Hamburgo en 1910. Cursó estudios universitarios en Ginebra y París. Vivió en España durante la República. En 1933 ingresa en la "Association des écrivains et artistes révolutionnaires". En 1934, publica en Madrid su "Ensayo marxista de la historia de España" (Cenit). Es detenido en Madrid durante la huelga general de octubre de 1934. Regresa a España después de las elecciones de 1936, y al estallar la guerra civil recorre diversos frentes de batalla. A raíz de su larga estancia en diversos países latinoamericanos, publica varios libros de poesías, pero la mayor parte de su obra se halla dispersa en un sinnúmero de diarios y revistas. Desde 1953 trabaja como traductor y editor en la Unesco y demás organizaciones de las Naciones Unidas. Al preparar, en 1976, una nueva edición de este ensayo, al autor le pareció imprescindible completarlo con un epílogo, "De 1934 a 1976", que toma la forma de una segunda parte del libro que ahora ofrecemos al lector.

COLECCION **70**